Universiteit
Leiden
The Netherlands

Concertación de Partidos por la Democracia: Coalición política, partidos y sistema electoral en Chile, 1987-2010

Yopo Herrera, M.D.

Citation
Yopo Herrera, M. D. (2013, October 2). *Concertación de Partidos por la Democracia: Coalición política, partidos y sistema electoral en Chile, 1987-2010*. Retrieved from https://hdl.handle.net/1887/21849

Version:	Corrected Publisher's Version
License:	Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden
Downloaded from:	https://hdl.handle.net/1887/21849

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page

Universiteit Leiden

The handle http://hdl.handle.net/1887/21849 holds various files of this Leiden University dissertation.

Author: Yopo Herrera, Mladen Daslav
Title: Concertación de partidos por la democracia : coalición política, partidos y sistema electoral en Chile, 1987-2010
Issue Date: 2013-10-02

Capítulo 2

El sistema político chileno en el siglo XX: los clivajes como trazadores partidarios y coalicionales

Junto a factores histórico-institucionales, la distintiva evolución de la política de partidos en Chile puede mirarse en parte importante sobre la base de fisuras sociales básicas (clivajes), las que se tradujeron en alternativas concretas de partidos en "coyunturas críticas (Scully 1995: 83-84). Primero, al examinar de cerca el desarrollo del conflicto clerical-anticlerical en el siglo XIX, se obtiene un cuadro sorprendentemente coherente de la cristalización de las políticas de partidos. Luego, el conflicto de clases que aparece con fuerza a principios del siglo XX redistribuyó a los competidores principales dentro del sistema de partidos, una reorganización política marcada especialmente por el surgimiento de partidos de clase obrera en zonas urbanas.

También está la extensión de la movilización política de la clase trabajadora al sector rural en la década de 1950, lo que precipitó una coyuntura crítica caracterizada por el surgimiento de un fuerte partido alternativo de centro, y la creciente polarización del sistema de partidos chileno. Por último, resaltaremos el clivaje transicional como moderador del sistema de partidos y facilitador de creación de la Concertación y del PPD como veremos más adelante.

El siglo XX ha sido un período en la historia marcado por innumerables hechos significativos que han tenido repercusiones en la formación y evolución del sistema de partidos en Chile a pesar de la lejanía y/o aislamiento que mostró el país.

Desde la elección de Arturo Alessandri Palma (1920) hasta nuestros días, se ha vivido la fragilidad de la democracia como parte sustancial del sistema político. Se ha verificado la positiva ampliación de los derechos ciudadanos y de la participación política a través del sufragio (ahí está la incorporación de la mujer a la vida política y al trabajo remunerado). El cobre reemplaza al salitre como principal pilar de la economía. El Estado continúa disputándose el protagonismo del desenvolvimiento económico con el empresariado nacional y los capitales extranjeros. Se modifica la estructura de propiedad de la tierra a través de la Reforma Agraria. Persisten los problemas y desigualdades sociales y atropellos a los Derechos Humanos. La influencia cultural y política de los Estados Unidos en competencia con un latinoamericanismo más revolucionario permite la lenta aparición de otras propuestas de la globalización. La

generalización de un modo de vida urbano con el traslado masivo de la población del campo. Las intervenciones militares (1924-1932) compartieron años con períodos democráticos, experiencia socialista democrática como la Unidad Popular (1970-1973) hasta el régimen cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990). La vigencia del modelo económico de "*Industrialización por Sustitución de Importaciones*" (décadas 1930-1960) fue interpelado por la adopción de un modelo económico neoliberal (desde 1975), hasta la transición a la democracia (desde 1990) que trata de humanizar en parte a este último aunque con un resultado relativo.

2.1 Etapa constitucional crítica (1891-1924)

En el marco del *path dependece*, entender el contexto histórico-cultural-estratégico y su impacto en el imaginario nacional, nos permite desentrañar y comprender los motivos que condicionaron una determinada decisión, la elección de un determinado camino, en este caso la Concertación y su proceso. Levi (1997: 28) grafica esto diciendo que:

> "(...) Quizás una mejor metáfora, es un árbol más que un sendero. Del mismo tronco, hay ramas diferentes, (más grandes) y más pequeñas. Incluso es posible rodear (el tronco) o trasladarse de una (rama) a otra y si la rama escogida muere, la rama en que empezó el escalador es la cual tenderá a seguir".

Enrique Correa también asume esto en el caso de Chile, al decir que: [1]

> "La memoria política desempeñó un papel primordial. No se puede olvidar que los diversos componentes de la coalición estaban en el centro mismo de los conflictos ideológicos en los años sesenta y setenta. Mucho más que una convergencia ideológica, esas fuerzas comulgaron en un mismo sentimiento de culpabilidad colectiva. Todos se sentían culpables de haberse dividido y de haber contribuido a la tragedia. Sobre todo se trataba de no repetir este error. Construir un compromiso nuevo para no repetir el pasado. Esto es cierto para las élites, pero pienso que todos los chilenos conservan una visión trágica del pasado, para ellos se trata también y sobre todo de no repetirlo".

Incluso, como lo sugiere Jon Elster,[2] cierta continuidad dentro de las élites "facilita el aprendizaje de las lecciones pasadas y el recuerdo de los acontecimientos pasados". Y esto es lo que pasó en Chile como lo recuerda el ex presidente Lagos:

[1] Entrevista de Javier Santiso a Enrique Correa, miembro fundador del MAPU, ex Ministro Secretario General de Gobierno bajo la presidencia de Patricio Aylwin, ex director de FLACSO-Chile, el 22 de septiembre de 1995, Santiago: FLACSO. Citada en http://www7.uc.cl/icp/revista/df/ev212/ r3.pdf

> "Recuperamos la democracia, después de dieciséis o diecisiete años de dictadura y no después de cuarenta, como en España. Cuando la democracia reapareció en el país (España), la mayoría de los actores políticos de antaño habían desaparecido. En Chile, al contrario, las memorias siguieron tanto más vivas cuanto que el número de actores era igual quince años después".[3]

Desde fines del siglo XIX comienza a emerger lo que podríamos llamar una etapa constitucional crítica. También la podríamos denominar la "*Era del Salitre*", ya que este mineral llegó a representar cerca del 80 por ciento del valor de las exportaciones chilenas, y cuya producción, aunque con altibajos, creció constantemente. Las minas (controladas principalmente por capital extranjero) atrajeron a muchos trabajadores del centro y sur del país que buscaban empleos mejor pagados, aunque la mayoría terminaría frustrado. Desde comienzos del siglo XX se inició la explotación de dos grandes minas de cobre, que llegarían a ser más tarde claves para la economía y el desarrollo del país: Chuquicamata en el norte y El Teniente, al sur de Santiago, ambas explotadas por capitales estadounidenses.[4]

Además de las minas, hubo en Chile un cierto desarrollo industrial (textil, cervecerías, cemento, maestranzas), todo lo cual dio nacimiento a la llamada clase obrera y tras el "congreso obrero" de 1885 y la huelga general de 1890 se constituyen como sujeto político nacional.[5] El desarrollo urbano y de los servicios también dio lugar a un reforzamiento de la clase media,[6] la que empieza a jugar un papel mayor desde 1938 (antes el país había sido dominado por la vieja oligarquía política y militar).[7]

---

[2] En Jon Elster (1988), "Consequences of constitutional choice: Reflections on Tocqueville", en Jon Elster y Rune Slagstad (eds.), *Constitutionalism and Democracy*, pp. 81-102. Cambridge: Cambridge University Press.

[3] Santiso, *op cit.*

[4] Ver José Pablo Arellano, "El cobre como palanca del desarrollo para Chile", en www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/227/El_Cobre_como_palanca_del_desarrollo_de_Chile.pdf

[5] Ver, entre otros, Sergio Grez (2000), "Transición en las formas de lucha: Motines peonales y huelgas obreras en Chile (1891-1907)", en *Historia* Nº 33. Santiago: Pontificia Universidad Católica; Gabriel Salazar (1985), *Labradores, peones y proletarios. Formación y crisis de la sociedad popular chilena del siglo XIX*. Santiago: SUR Ediciones; y Miguel Fuentes (2009), "Entre el nacimiento de la clase obrera en Chile y su constitución como sujeto político. El 'Congreso Obrero' de 1885 y la Huelga General de 1890 como antecedentes históricos de la matanza de Santa María", Cuadernos de Historia Marxista, Serie Movimiento Obrero 1: 1.

[6] Aunque es un estrato amplio y movible, a modo de referencia comparto la definición de clase media que hace Raúl Alarcón (1947), en *La clase media en Chile. Orígenes, características e influencias*, pp. 88 y 111. Santiago: Editorial Tegualda. Este la define como "(...) aquella cuya situación económica, moral, política y cultural es producto, principalmente, del esfuerzo personal, del trabajo y del estudio".

[7] Ver Gabriel Salazar y Julio Pinto (2002), *Historia de Chile contemporánea IV. Hombría y feminidad*. Santiago: Editorial LOM.

La sociedad se hizo más diversificada, pero los conflictos sociales fueron también más agudos, se sumaron nuevos clivajes: hubo frecuentes protestas por la carestía y el precio de productos básicos y huelgas por aumentos salariales, algunas de las cuales fueron reprimidas violentamente (cuestionamiento del modelo económico y clivaje de la lucha de clases).[8]

En lo político, esta época es conocida como la "*República Parlamentaria*" de 1891-1925. Este nombre se debe al hecho que tras la Guerra Civil de 1891, se reformó la Constitución para permitir que los ministros fuesen censurados con mayor facilidad por los parlamentarios, lo que dio a los congresistas mayor influencia sobre el poder Ejecutivo.

También se consolidó la transición de un sistema bipartidista a uno multipartidista: a los liberales divididos en varios grupos, los conservadores, los radicales (que aumentaban su votación) e importantes grupos anarquistas, se sumaron nuevas formaciones creados por dirigentes obreros: el Partido Demócrata fundado en 1887 y el Partido Obrero Socialista en 1912, que en 1922 pasó a ser Partido Comunista.[9] Aunque estos dos nuevos partidos no lograron un gran porcentaje de la votación, su presencia, además de consolidar un sistema multipartidario, llevó a plantear nuevos temas de discusión en las campañas electorales, a generar nuevas alianzas y a una transparencia de los clivajes tradicionales a través de las discusiones y plataformas partidarias.

El sistema de partidos entre 1891 y 1924 puede calificarse de un moderado pluripartidismo extremo, con la presencia de 6 partidos y dos bloques claramente diferenciados (la Alianza Liberal y Coalición Conservadora). La lucha entre ellos no respondía a conceptos ideológicos claramente diferenciados, no existían proyectos antagónicos de sociedad que los diferenciara y, a pesar de que la pugna proletario-oligarquía comenzaba a entreverse,[10] las diferencias políticas seguían asentadas en la lucha laico-religiosa (clivaje).

Esto último se percibe con claridad en el Partido Demócrata (1887) y que representó, fundamentalmente, los intereses de los trabajadores. Sus antecedentes están en un grupo del Partido Radical disconforme con la poca atención de este partido a las demandas y situaciones de los artesanos y clase obrera en general. Postuló un programa

[8] Para ahondar en este tema, entre otros, es recomendable leer a Hernán Ramírez Necochea (1956) *Historia del movimiento obrero*. Santiago: Editorial Austral.
[9] Ver Augusto Varas (1988), *El Partido Comunista en Chile: Estudio multidisciplinario*. Santiago: CESOC-FLACSO.
[10] En 1909 se fundó la Federación Obrera Chilena (FOCH), con bases gremialista, pero en 1911 ingresan a ella los partidarios de Recabarren, dándole un cariz sindical-revolucionario.

republicano, laico y democrático que expresaba la fractura Estado-Iglesia. Estuvo fuertemente influenciado por los ideales de la Revolución Francesa y los postulados de Francisco Bilbao.[11] Este grupo estuvo encabezado por Malaquías Concha Ortíz y Avelino Contardo entre otros. Su primera participación política fue en las manifestaciones por las alzas en los Carros Urbanos de Santiago (transporte) en abril de 1888. Se extinguió en 1941 al fusionarse con el Partido Democrático.

La presencia de los nuevos partidos se expresó con claridad en la elección presidencial de 1920, ganada por el liberal Arturo Alessandri Palma,[12] quien fue apoyado por radicales y demócratas (aunque él, junto a Carlos Ibáñez y Jorge Alessandri representen la fuerte tradición antipartidaria que encierra la política chilena del populismo y caudillismo y que posteriormente encontraremos en el gobierno de Pinochet). Por primera vez en la historia del país, había ministros de esos dos últimos partidos y se empieza a consolidar la presencia de los sectores medio (y "centristas") en la política con muchos de ellos en el Parlamento.

En 1925 entró en vigencia una nueva Constitución (principal marco regulatorio de la política nacional), que, con sus 110 artículos y 10 disposiciones transitorias, impuso un régimen presidencial tras tres décadas de un seudo parlamentarismo. Esta Constitución estuvo vigente hasta septiembre de 1973, sufriendo varias reformas que fortalecieron la figura del Ejecutivo (1943, 1957, 1959, 1963, 1967, 1969, 1970 y 1971).

Del gobierno de Alessandri se esperaba avances en el campo de la legislación social (un código del trabajo por ejemplo) y en el plano de la democratización, pero estas promesas no se concretaron por la oposición conservadora (veto players de la época) y la indisciplina de sus propios parlamentarios. Esto, sumado a la crisis del salitre motivada por la competencia del salitre sintético en el mercado mundial y su efecto en la cesantía, provocaron una gran crisis política en 1924 (*critical junture*) que culmina en una nueva intervención militar.

Para esta fecha ya había nacido a la vida política el Partido Comunista de Chile, bajo el nombre de Partido Obrero Socialista (POS) en la ciudad de Iquique por el obrero tipógrafo Luis Emilio Recabarren, junto a unos 30 obreros salitreros y empleados. En enero de 1922 adopta el nombre de Partido Comunista de Chile al incorporarse a la Internacional Comunista. Se definió como un partido de raigambre obrera, campesina e

[11] Ver a Bernardo Subercaseaux (1997), "Sociedad y cultura liberal en el siglo XIX: J.V. Lastarria", en "Historia de las ideas y de la cultura en Chile", tomo I. Santiago: Editorial Universitaria.
[12] Arturo Alessandri Palma (1868–1950) fue presidente de la República por dos períodos, entre 1920-1925 y 1932-1938.

intelectual, inspirado por el pensamiento de Karl Marx y Vladimir Lenin, lo que explicitó en la escena política la lucha de clases y la oferta de cambio social.[13]

Entre 1924 y 1938 en Chile hubo diversas experiencias políticas, varias de las cuales implicaron el uso de la fuerza-violencia. Estos cambios fueron motivados, a grandes rasgos, por el impacto de la crisis del salitre, la crisis mundial de la economía del 29 y por la influencia de los movimientos autoritarios en Europa (fascismo y nazismo) que también tuvieron expresión en el país.[14]

La primera experiencia en que se usó la fuerza fue la intervención militar del 1924, la que se prolongó hasta 1931. Esta acción tuvo orígenes complejos y resultados desiguales. Al comienzo pareció tener un significado social positivo, ya que los militares, encabezados por el coronel Carlos Ibáñez del Campo,[15] forzaron la aprobación de algunas leyes sociales, como aquellas que creaban un sistema de pensiones y el Código del Trabajo, que permitían organizar los sindicatos y reglamentar las huelgas. Pero, por otro lado, esa intervención acarreó la renuncia de dos presidentes elegidos (Arturo Alessandri y Emiliano Figueroa), la elección de un militar (Carlos Ibáñez) a la presidencia, el que ejerció el poder en forma dictatorial, intentó manipular a los sindicatos, declaró ilegal al Partido Comunista, reprimió y limitó seriamente la libertad de expresión. Todo esto se produce en presencia de un Parlamento compuesto por miembros no elegidos, pero que reflejaban el acuerdo de los principales partidos y, sobre todo, de las élites.

Como Ibáñez no contaba con apoyo político para las parlamentarias de 1930, llegó a un acuerdo con los partidos políticos para evitar la lucha electoral. Así, se decidió aplicar la deficiente norma de la Ley de Elecciones que establecía que, si el número de candidatos no sobrepasaba al número de representantes que debían elegirse, no había necesidad de efectuar la elección. De esta manera, los dirigentes políticos se reunieron en las Termas de Chillán y elaboraron las listas de candidatos, por lo que la elección, en la práctica, se hizo innecesaria. Este fue el origen del llamado "*Congreso Termal"*. Dicho congreso fue criticado duramente por la oposición. El sucesor de Ibáñez, Juan E.

[13] *Op cit*., Augusto Varas (1988), *El Partido Comunista en Chile: Estudio multidisciplinario*. Santiago: CESOC-FLACSO.
[14] Véase Víctor Farías (2000), *Los nazis en Chile*. Santiago: Editorial Planeta.
[15] El coronel Carlos Ibáñez entró en la escena política el año 1924 liderando a un grupo de oficiales que expresaron su molestia contra el Parlamento. Este movimiento se denominó "ruido de sables" debido al estruendo que produjeron los oficiales con sus armas. Fue la primera incursión directa de los militares en la política en casi cien años y consiguieron que los parlamentarios aprobaran en pocos días las leyes sociales que habían sido aplazadas por Arturo Alessandri, al llegar al poder en 1920.

Montero, electo en elecciones directas no convoca a elecciones del Parlamento y ello fue considerado una de las razones de su posterior caída.

Aprovechando una coyuntura económica favorable entre 1927 y 1929, el general Ibáñez multiplicó las obras públicas y creó organismos de crédito industrial y agrario. En el plano administrativo fusionó los diversos cuerpos de policía uniformada que había en el país, creó la Contraloría General de la República, la Fuerza Aérea y Carabineros de Chile, entre otros. En julio de 1931 Ibáñez renunció al poder luego de las masivas protestas tras los graves problemas económicos causados por "La Depresión de 1929" y fue electo Juan Esteban Montero.

La situación política siguió muy inestable durante la mayor parte de la década de 1930. En septiembre de 1931 se produjo una rebelión de la marinería de guerra, y en junio de 1932 tuvo lugar un golpe de Estado por parte de un grupo de civiles y de militares con ideas de izquierda que tomaron el poder y proclamaron una efímera "República Socialista".[16] Duró apenas 12 días, pero se decretaron una serie de leyes que nunca fueron anuladas o reformadas y que sirvieron de base legitimadora legal para una serie de políticas impulsadas durante el gobierno del presidente Allende y la Unidad Popular.[17]

La cultura estratégica chilena, en este sentido, entonces, no solo concibe a la elección como factor de cambio sino también a la movilización y al golpe de Estado como posibilidades aunque no legitimadas con un efecto negativo sobre el sistema de partidos.

En 1933 surgió un movimiento de inspiración nacional socialista que tuvo cierto auge. Ese mismo año, desconfiando de la lealtad de los militares, el gobierno del liberal de Arturo Alessandri (elegido por segunda vez a la presidencia en 1932) propició la formación de una importante organización armada de civiles de derecha, la "*Milicia Republican*a",[18] que aspiraba a defender un orden que parecía amenazado. Solo en

[16] En la tarde del 4 de junio de 1932, un grupo de rebeldes de la base aérea El Bosque derrocaron al presidente Juan Esteban Montero, y se proclamó la República Socialista de Chile. El principal objetivo de la República Socialista era el de hacer una restructuración social y de garantizar de que no faltara pan en la mesa de cada persona que trabajara y cumpliera su labor con la sociedad, algo que el Partido Comunista no creyó. En Carlos Charlín O. (1972), *Del avión rojo a la república socialista*. Santiago: Editorial Quimantú.

[17] Ver, entre otros, Raimundo Meneghello (2010), *Eugenio Matte Hurtado. Textos políticos y discursos Parlamentarios*. Santiago: Editorial LOM.

[18] A pocos días de terminada la "*República Socialista*", el 24 de julio de 1932, es fundada la Milicia Republicana bajo el lema "Orden, Paz, Hogar y Patria". Es un ejército creado y organizado, compuesto por más de 80.000 civiles, y que se opuso tenazmente a que los militares volvieran a incursionar en la arena política.

1938, tras una tentativa de golpe de parte de los nazis criollos, se volvió a una vida política más estable.

Un hecho clave para la estabilidad de la sociedad fue la elección ese año del gobierno del Frente Popular,[19] alianza de centro-izquierda que reunía a radicales, socialistas y comunistas, en una coalición pluriideológica y multiclasista al agrupar a algunos propietarios, con sectores medios y la clase obrera. Este tipo de coaliciones que se cristalizaron en la Europa de los años 30 (ej. España y Francia) y también en América Latina (ej. la Alianza Nacional Libertadora del Brasil de 1935) para hacer frente al peligro del ascenso de ideologías totalitarias (especialmente el fascismo y el nazismo) y la amenaza de la destrucción de la democracia a través de un vaciado de las propias instituciones constitucionales tras caer el gobierno o el parlamento en manos de ellas, en Chile adquirieron además un sentido más programático y transformador al estar sus partidos miembros anclados a ideologías y programas que proponían el cambio social.

En lo anterior se ratifica la capacidad cultural de los partidos de programas transformadores en Chile para la formación de coaliciones de carácter pragmático, pluriideológica y multiclasista, capacidad que es reutilizada en la Concertación.

La economía, aunque siempre basada en la exportación de minerales, como el cobre y el salitre, se recuperó gradualmente de la crisis de 1929. La presencia de capitales norteamericanos fue cada vez más grande, tanto en las minas como en nuevos servicios, como el de los teléfonos, y que fue controlado en forma monopolística por transnacionales como la ITT desde 1929.

Hubo algunas industrias nacionales que adquirieron gran importancia, como la textil Yarur, fundada en 1935. Vital para ello fue el surgimiento de un Estado grande, planificador e interventor, comprometido con el desarrollo y la protección social, tras la crisis de los años treinta que derrumbó los mercados internacionales de exportación de productos primarios que habían sido la base de las economías de los países como Chile desde la época colonial. Ante la falta de divisas, los gobiernos de la región se encontraron ante la imposibilidad de continuar importando los bienes de capital y manufacturados de los cuales dependían sus incipientes procesos de desarrollo. La respuesta fue intentar producir localmente lo que antes se importaba. La creación de la Nacional Financiera en México y de la Corporación del Fomento de la Producción en Chile, durante el decenio de 1930, fueron algunas de las primeras expresiones visibles

[19] Ver Pedro Milos (2008), *Frente Popular en Chile. Su configuración 1935-1938.* Santiago: Editorial LOM.

de las políticas de industrialización que surgieron como respuesta al agotamiento del modelo importador.[20]

2.2 El presidencialismo multipartidista y la política de los "compromisos" (1938-1970)

Claramente aquí se había dado lo que autores como Pierson (2000: 251-267) han catalogado como una coyuntura crítica (crtitical junture) y, por lo mismo, esta había llevado a cambios institucionales abruptos (reactive sequence).[21] En la teoría del path dependence las crisis son puntos de partida (e impulsan) un espectro importante de cambios que son difíciles (costosos) de revertir a pesar de haber otras decisiones como lo plantea Levi (1997: 28).

Esta etapa la inaugura el regreso de Arturo Alessandri[22] de su exilio (1925) y el mando presidencial que le entrega la Junta de Gobierno. Alessandri llega con la idea de reformar la Constitución de 1833, para lo cual crea dos subcomisiones: la de reforma que redacta una Constitución de corte presidencialista y la encargada de la organización y convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Reiterando el temprano sentido legalista de la cultura estratégica nacional como factor legitimador, se usó el plebiscito como mecanismo para aprobar la Constitución Política de 1925 y cuyo propósito era (Godoy, 2003: 12) disminuir el poder del parlamento en asuntos relacionados con la creación de empleo, salarios, beneficios para el sector público, pensiones de gracia y otros, que eran instrumentos clientelismo político de los partidos. Veremos más adelante cómo el propio Pinochet recurre a este mecanismo de consulta popular, en sus versiones vinculantes y para su propia legitimación.

Otro hecho relevante de este período fue la elección del radical Pedro Aguirre Cerda como presidente en 1938. Este hecho constituye un hito al constatar, por una lado, que por primera vez los partidos oligárquicos perdían una elección presidencial y, por el otro**,** se afianzaba la tendencia de alianzas de partidos de distinto pensamiento en vistas

[20] Ver a J. Mark Payne, Daniel Zovatto G., Mercedes Mateo Díaz (2003), "La política importa: Democracia y desarrollo en América Latina", p. 2, Washigton: BID-IDEA.
[21] La derrota en la batalla de Lircay (1830), "transformó el pipiolismo (de base propositiva) en liberalismo (de base crítica y opositora)". También "retrotrajo la situación a las raíces de 1823, cuando todos fueron liberales para derrocar a O'Higgins". En Julio Pinto y Gabriel Salazar, "Sistema político, partidos, ciudadanía", p. 19, en http://www.archivochile.com.
[22] Ver Claudio Orrego Vicuña (1979), *Siete ensayos sobre Arturo Alessandri Palma*. Santiago: Instituto Chileno de Estudios Humanísticos.

a conquistar el poder, reflejando con ello no solo un hecho poco común en Latinoamérica sino un cambio cualitativo en estas instituciones políticas (combinación de sentidos ideológicos con pragmatismos electorales). Este último rasgo se reforzó en 1935 cuando comenzó a formarse el Partido Demócrata Cristiano, que tomó su nombre definitivo en 1956. Se diseña, de esta forma, un nuevo estilo de hacer política basado en el "compromiso" y la formación de coaliciones en vista a ganar el poder a través de procesos electorales, y gobernar en forma aliada ya que ningún partido tenía fuerza suficiente para hacerlo solo y dar estabilidad al país. Se iniciaba de esta manera lo que se denomina sistema presidencial multipartidista.

El sucesor de Aguirre Cerda, el radical Juan Antonio Ríos, recibió apoyo del Partido Socialista y de algunos liberales; Gabriel González Videla, otro radical, elegido en 1946, fue apoyado por comunistas y liberales; Carlos Ibáñez, el ex dictador, elegido en 1952, se parapetó en la alianza entre una fracción socialista y de un partido que tuvo corta vida, el agrario-laborista; en 1958, Jorge Alessandri (independiente de derecha) gobernó con liberales, conservadores y radicales. El único presidente que gobernó solo con el apoyo de su propio partido de centro fue el demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva (1964 a 1970), particularmente por la esencia seudo "mesiánica" de la DC.

En esta etapa se puede estimar que la democracia tuvo progresos importantes con la negociación y la formación de coaliciones que dieron mayor estabilidad política (no hubo nuevos golpes de Estado), al ampliar considerablemente el cuerpo electoral gracias al derecho de voto para la mujer (1949), disminución del fraude electoral y a la diversidad de partidos presentes en la arena política que indicaba mayor tolerancia hacia la diversidad ideológica.

La extensión del voto a las mujeres fue motivo de debate por diversas razones (mediatizador de los cambios al considerarse un voto conservador, menosprecio del género, etc.) desde la década de 1920. Sin embargo, la oposición de los partidos anticlericales y de izquierda, debido a la tendencia conservadora del electorado femenino, retardó por varias décadas la concesión de ese derecho. En 1935 se aprobó el voto femenino para las elecciones municipales, y recién en 1949 se concedió el derecho a voto de las mujeres para las elecciones presidenciales y parlamentarias. Las mujeres participaron por primera vez en la elección presidencial de 1952, en donde fue electo Carlos Ibáñez. Desde entonces, su participación en los procesos electorales se fue ampliando progresivamente hasta llegar en 1970 a la paridad con los votantes

masculinos[23] y siguió siendo considerado un voto más conservador hasta la elección de la presidenta Bachelet en el 2006, donde se empieza a consolidar un cambio de la cultura estratégica del país.

La situación de tolerancia y de avance democrático, sin embargo, sufrió una limitación (retroceso) importante entre 1948 y 1958, cuando Chile se alinea con la política exterior de Estados Unidos durante la Guerra Fría y donde a nivel interno se aplicó la ley de "Defensa de la Democracia" (Ley Nº 8.987 de 1948) o también llamada la "*Ley Maldita*" por los comunistas.[24] Esta tenía por finalidad proscribir la participación política del Partido Comunista y limitar la vida política en general. Para ello se cancela la inscripción del Partido Progresista Nacional (nombre que usaba el PC en las elecciones) y se borraba del registro electoral a sus militantes o personas sospechosas de participar en dicha organización. Esto también significaba que los regidores, alcaldes, diputados y senadores electos debían ser inhabilitados y despojados de sus cargos. Similares sanciones se aplicaban para la administración pública en general, además de prohibir toda organización, propaganda o asociación similar. Se sancionaban todas las reuniones o actos que fueran opuestos al régimen político (limitación del derecho de huelga). Las sanciones de la ley se extendían también a quienes cooperaran.[25]

Durante la aplicación de la "*Ley Maldita*", miles de personas perdieron sus derechos cívicos y muchos fueron internados en campos de detención como Pisagua. El poeta y Premio Nobel, Pablo Neruda, militante comunista, debió salir clandestinamente del país para evitar la cárcel. Solo a fines de los años 1950 se volvió a respetar plenamente la democracia política, cuando esa ley fue abolida al finalizar el mandato de Carlos Ibáñez del Campo. Además, en 1953 se formó la Central Única de Trabajadores (CUT) que dio mayor presencia a los sindicatos en la vida nacional. Sin embargo, durante largo tiempo la vida sindical estuvo limitada a los trabajadores urbanos, ya que a través de diversas tácticas, los propietarios de tierras impidieron la formación de sindicatos en el campo.

En política internacional, Chile mantuvo una política de neutralidad durante gran parte de la Segunda Guerra Mundial (rompió sus relaciones con Alemania en enero de 1943 y le declaró la guerra en 1945). Posteriormente, Chile fue país cofundador de la

[23] Ver "Elecciones, sufragio y democracia en Chile (1810-2005)", en www.memoriachilena.cl
[24] Para el caso de América Latina, ver Alan Angell (1997), "La izquierda en América Latina desde 1920", en Leslie Bethell (ed.), *Historia de América Latina* 12: 73-131. Barcelona: Editorial Crítica-Grijalbo.
[25] Ver Luis Trabucco Godoy (1953), Sobre la Ley Nº 8.987 (de defensa permanente de la democracia). Santiago: Editorial Jurídica.

ONU y de la OEA. Como resultado de su adhesión a este último organismo hemisférico y de su alineamiento con Estados Unidos, Chile rompió relaciones con Cuba en 1962. Aunque en la votación sobre esta materia la delegación chilena se había abstenido, acató la decisión de la mayoría que estaba hegemonizada por Estados Unidos.

La economía experimentó durante este período algunos cambios importantes. El salitre había perdido importancia, mientras la exportación de cobre se elevaba como una actividad clave y la industria cobraba mayor relevancia gracias, en gran parte, al apoyo que recibió del Estado desde 1939. Ese año precisamente se creó la CORFO (Corporación de Fomento de la Producción), una institución creada por el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que daba créditos a las distintas actividades de la economía y que también creaba o compraba empresas. Además, se reforzó la electrificación del país con varias centrales hidroeléctricas y se comenzó la explotación de petróleo en Magallanes, todo ello por iniciativas estatales (en los años 1960 más del 40 por ciento de las inversiones dependían del Estado). Aunque esas medidas trajeron cierto progreso, también hubo problemas serios como la fuerte inflación de los años 1940 y sobre todo de los años 1950, y que no pudo ser resuelto posteriormente. Aunque la cesantía era baja (inferior al 10 por ciento) había mucho subempleo y la agricultura no progresaba; al contrario, desde los años 1950 Chile debió importar una parte importante de sus alimentos.

Un escenario complejo consolidó ciertas tendencias caudillistas y populistas, como se percibe de la triada presidencial compuesta por Gabriel González Videla (1946-1952), Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958) y de Jorge Alessandri Rodríguez (1958–1964). Este último, por ejemplo, a pesar de ser una de las figuras señeras de la derecha, propugnaba una tecnocracia política que se asemejara al estilo de la empresa privada como se percibe de su lema una "gerencia para Chile" y gana la elección presidencial de 1958 sin mayoría (ver Cuadro 4), por escaso margen y con la ayuda de Antonio Zamorano Herrera (*cura de Catapilco*), ex diputado de la coalición de izquierda de Salvador Allende el Frente de Acción Popular (FRAP),[26] quien consigue votos

[26] El Frente de Acción Popular fue una combinación política de partidos de izquierda fundada el 1 de marzo de 1956 y extinta en 1969. Se configuró como una alianza estrecha de "partidos de masas", integrada por el Partido Comunista (en ese entonces proscrito por la Ley de Defensa de la Democracia; el Partido Socialista Popular (solo hasta 1957, año en que las diferentes fuerzas socialistas se unifican), el Partido Socialista de Chile, el Partido Democrático del Pueblo y el Partido Democrático quienes se fusionan conformando el Partido Democrático Nacional (PADENA), y se retiran del FRAP en 1965. En 1958 se integró la Vanguardia Nacional del Pueblo, y la Social Democracia en 1965. En términos de ideario el FRAP, consideraba como apremiante promover la nacionalización de los recursos naturales del

populares del progresismo en las zonas de Valparaíso, Aconcagua, Talca y Linares que terminan perjudicando la opción del candidato oficial del FRAP.

Lo importante detrás de este episodio es el ascenso de las fuerzas populares ancladas, además de su esfera gremial, en partidos programáticos y refundacionales. Esto tiende a agudizar varios de los clivajes existentes en Chile, en particular el de propietarios-trabajadores.

Cuadro 4
Elección presidencial de 1958

Candidato	Partido	Votos	%
Salvador Allende G.	PS-FRAP	354.300	28.91
Jorge Alessandri	Ind. Derecha	386.197	31.52
Luis Bossay L.	PR	189.152	15.43
Eduardo Frei M.	PDC	254.223	20.75
Antonio Zamorano	Ind. FRAP	41.244	3.36

Fuente: Registro Electoral on line: www.servel.cl/

Así, desde comienzos de la década de 1960, bajo el gobierno de Jorge Alessandri el país se encaminaba a una fase de radicalización progresiva (polarización) de las opciones políticas a partir, entre otros, de la falta de mayoría del gobierno, de los problemas económico-sociales existentes y, en especial, del efecto demostrativo y clave que tuvo la Revolución Cubana[27] en el imaginario y devenir práctico nacional. Había un claro miedo al comunismo de parte de una proporción importante del país. La fractura ideológica de la Guerra Fría se manifestó con fuerza en la sobreideologización de los partidos con principios absolutos e inmutables en los llamados tres tercios en que se dividía el sistema de partidos en Chile. Tanto la Democracia Cristiana como la alianza de la izquierda de socialistas y comunistas en el Frente de Acción Popular (FRAP), postulaban (en distinto grado) cambiar la sociedad en lo profundo, particularmente la izquierda.

país, sobre todos los mineros. Además, propiciaban el fortalecimiento del Estado, el cual, a su juicio, debía ejercer un control centralizado de la economía del país. En biografias.bcn.cl

[27] Los candidatos eran Eduardo Frei por la DC, Salvador Allende por el FRAP (postulaba por tercera vez) y Julio Durán por el Frente Democrático que agrupaba a los partidos radical, liberal, conservador y a la derecha en general. La campaña fue muy reñida, por las opciones de los candidatos como por la diferencia de los programas de gobierno. Sin embargo, el llamado Naranjazo del 15/03/1964 cambió la elección: la muerte del diputado socialista de Curicó, Oscar Naranjo, dio la oportunidad a los partidos de medir sus fuerzas y sorpresivamente para la derecha, el hijo del parlamentario fallecido ganó la elección. Producto de esto, la derecha temió el triunfo de Allende por lo que Durán renunció (después retomaría la candidatura, para no dividir al radicalismo) y luego decidió apoyar al considerado mal menor, Eduardo Frei Montalva. En un contexto donde tanto la derecha como Estados Unidos hicieron una campaña del terror sistemática y millonaria en contra de Allende.

En 1964 triunfó el candidato de la Democracia Cristiana, Eduardo Frei Montalva, recibiendo los votos de la derecha, que preferían su victoria como mal menor, ante la posibilidad de un triunfo de la izquierda con Salvador Allende (Cuadro 5).

Cuadro 5
Elección presidencial de 1964

Candidato	Partido	Votos	%
Salvador Allende G.	PS	997.902	38.92
Eduardo Frei M.	PDC	1.409.012	56.08
Julio Durán N.	PR	125.233	4.98

Fuente: Registro Electoral on line: www.servel.cl

Muchos autores ven en este período el comienzo del fin en lo que al régimen democrático se refiere. La idea del "*Estado Compromiso*"[28] y sus implicancias, y la idea del frágil equilibrio de las fuerzas políticas existente, sustentado en el clientelismo político, cuyo "máximo representante" lo constituía el Partido Radical, fueron dos cimientos básicos de la institucionalidad política del país que el gobierno de Frei Montalva se encargará de desarticular pero sin ofrecer una base alternativa sobre la cual reconstruir el quehacer político.[29]

Alentados por su éxito electoral sin precedentes, los democratacristianos intentaron gobernar solos (estrategia hegemónica). Así, en vez de ampliar su base política y salir a buscar potenciales aliados de gobierno, impusieron la fórmula de gobierno del "camino propio" demostrando un gran desprecio por las prácticas de negociación que tradicionalmente se habían desarrollado en la política chilena; solo entraron en alianzas temporales de gobierno con otros partidos con la finalidad de asegurar una legislación específica (Scully, 1992: 204).

Esto rompió una práctica de larga data en torno a gobiernos de coalición, el régimen presidencial con alianza de partidos de Góngora (1986: 237), realidad que facilitaba la estabilidad democrática a través de la confluencia en los cargos de gobierno y/o en el plano de las ideas de los más diversos partidos políticos (juego de mayorías con compromisos).

[28] Desde 1929, según Garretón, se produce en Chile un "triple proceso", industrialización sustitutiva, "democratización sustantiva" (o sea, redistribución y satisfacción de "demandas sociales"), que el desarrollo hacia adentro "mediatizado" por el Estado permite, y evolución del sistema político democrático, con incremento de la participación, donde, además, en un sistema de transacciones, "ninguna clase en particular logra asegurar su hegemonía definitiva". Extraído del artículo de David Gallagher (1984), "Manuel Antonio Garretón: El proceso político chileno", *Estudios Públicos* 13: 2.
[29] Ver Tito Flores Cáceres (2007), "1964", en www.politicapublica.cl/wp-content/uploads/2007/09/va-02-1964-tflores.pdf

Durante el gobierno del presidente Frei Montalva,[30] que había prometido la épica de una "*Revolución en Libertad*",[31] se inició el proceso de reforma agraria y el cobre fue parcialmente nacionalizado, al comprar el Estado chileno el 51 por ciento de las acciones de las compañías estadounidenses (proceso de "c*hilenización*"). Al mismo tiempo, Frei trató de atraer a inversionistas extranjeros, y recibió el apoyo de la Alianza para el Progreso, el programa de ayuda económica ofrecido por Estados Unidos a países latinoamericanos para fortalecer propuestas alternativas a las de las izquierdas en el continente y con eso aplicar la teoría de la contención del comunismo que planteaba George Kennan.[32] En el plano social, su gobierno estimuló la formación de sindicatos, especialmente en el sector agrario, y dio lugar a una importante red de organismos para las mujeres, los Centros de Madres. El gobierno del Presidente Frei Montalva mostró algunos atisbos también del clivaje latifundio-nueva burguesía emergente.

Todo esto, en particular su condición de tercer polo programático (partido de centro), lo "enemistó" con la derecha y la izquierda (y también con el centro radical por su condición confesional): el primero no le perdonaba el haber atentado contra el derecho de propiedad al hacer la reforma agraria y los segundos le reprochaban no ir más lejos en sus políticas de cambio. Bajo su gobierno hubo además varias acciones represivas del Ejército y de los Carabineros, lo que tuvo como resultados la muerte de cerca de cuarenta personas en diversas acciones. La efervescencia política se hizo sentir también en las aulas universitarias, donde en 1967 se impuso un movimiento reformista que dio a los estudiantes el derecho a votar para la elección de rector.[33] Durante este período e inspirado por la revolución cubana, también nació en Concepción en 1965

[30] Interesante al respecto es la publicación de Cristián Gazmuri Riveros (2000), *Eduardo Frei Montalva y su época.* Santiago: Editorial Aguilar.

[31] Ver el épico discurso "La Patria Joven" pronunciado por Eduardo Frei Montalva el 21 de junio de 1964, en www.retoricas.com/2010/06/discurso-eduardo-frei-la-patria-joven.html

[32] En el llamado "Telegrama Largo" que envió Kennan desde su puesto diplomático en Moscú en 1946, y en el artículo que escribió posteriormente titulado "Las fuentes del comportamiento soviético" (artículo X, publicado en *Foreign Affairs* 5(4): 537-549, de julio de 1947), sostenían que el régimen soviético era expansionista por naturaleza y que su influencia debía ser *contenida* en las áreas de importancia estratégica vital para los Estados Unidos. Kennan también desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de los programas e instituciones que definieron la Guerra Fría, especialmente el Plan Marshall.

[33] En un marco de internacional y nacional complejo y efervescente, en la segunda mitad de los años 60, las ocho universidades que componían el sistema universitario chileno experimentaron un profundo y extenso cambio conocido como reforma universitaria. Esta última modificó de manera sustancial el contenido y las orientaciones de las funciones universitarias, estableció una nueva estructura de autoridad y poder que permitió la participación de la comunidad universitaria en el gobierno de las universidades y se esforzó por buscar una mejor inserción de éstas en los afanes por lograr el desarrollo y la modernización del país. Entre 1967 y 1968 todas las principales universidades se encontraban inmersas en el proceso de reforma. La reforma fue suspendida junto con la interrupción en 1973. En www.memoriachilena.cl

desde sectores acomodados de los sectores medios el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), que llevó a cabo algunas acciones armadas, aunque no llegó a transformarse en guerrilla propiamente tal.

La economía chilena, en este período, comenzó a demostrar paulatinamente que no podía hacer frente a todas las demandas que desató el proceso de incorporación, produciéndose junto a la hipertrofia de la administración pública, una inflación crónica, la contracción de la tasa de inversión y las distorsiones externas. Esto terminó incrementando la conflictividad en el país, por lo que, según varios historiadores chilenos, "...los últimos años de la administración de Frei fueron ensombrecidos por un desorden social exteriorizado en huelgas, paros, toma de predios, asaltos a mano armada protagonizados por diversos grupos extremistas (...)" (Casas, 1991: 343).

David Gallagher, citando a M.A. Garretón, respecto a este período, dice que:

> "(...) Durante el gobierno de Frei se procura, en vano, dar un "gran salto adelante' para 'mantener este triple juego', y se hace 'profundizando la industrialización', e incorporando a los sectores marginales rurales y urbanos hasta entonces excluidos. El intento es vano debido al agotamiento y a la lógica 'excluyente' del 'capitalismo dependiente", cuyas 'exigencias de acumulación y estabilidad no permiten ya los sesgos redistributivistas y participacionistas' (...) En consecuencia, el capitalismo pierde su 'legitimidad' y se produce 'la aceptación más o menos generalizada del carácter socialista de la revolución".[34]

El corolario de este proceso, más allá de la radicalización del país y su expresividad en tajantes tres tercios que dividieron la política, fue la victoria del socialista Salvador Allende, el cual, a la cabeza de una alianza de diversos partidos de izquierda (socialista, comunista, radical, disidentes de la DC e independientes) insertos en el clivaje de clase, ganó estrechamente la elección presidencial de 1970. A pesar de las coincidencias entre el programa de gobierno del candidato de la izquierda y la de Radomiro Tomic de la DC, en parte por la condición de este último de tercer referente programático, impidió un acuerdo político que le diera más estabilidad al sistema político y a la democracia.

Muy atinadamente el historiador Mario Góngora (1986: 271) denomina este período el de las "planificaciones globales", cuando diversas fuerzas políticas presentaban programas políticos de "refundación nacional", sin estar dispuestos a establecer alianzas políticas con otras fuerzas fuera de su prisma ideológico para realizarlos. Esto no solo

[34] David Gallagher, *op cit*, p. 2.

impidió la formulación de proyectos con mayorías políticas, sino que relevó las fracturas sociales y polarizó el sistema de partidos.

2.3 El Socialismo democrático en un sistema de partidos de extrema polarización

Los tres años de la Unidad Popular (1970-1973) constituyeron tal vez la experiencia política más compleja de la historia republicana (y también latinoamericana):[35] Salvador Allende era el primer presidente socialista en llegar al poder mediante el voto en un contexto internacional caracterizado por la aguda y brutal disputa global que implicaba la Guerra Fría y en un sistema de partidos que se encaminaba a la extrema polarización.

Ricardo Yocelevzki[36] describe el sistema de partidos chileno, previo al golpe militar, como uno abierto a la dominación social, en el cual por medio de la integración ideológica a través de la promesa de representación que harán ciertos partidos, se liga de forma muy estrecha el apoyo y adhesión de ciertos grupos sociales. Así, desde 1970 en adelante, se produjo que el país viviera no solo un clima de polarización política (estadio que habría alcanzado su máximo semanas antes del golpe), sino de hipermovilización, lo cual habría agudizado esta situación.

Otro de los problemas en esta época era la existencia de un sistema electoral que no contemplaba la legitimación de la segunda vuelta (balotaje) en situaciones de mayorías relativas, y las de tipo de régimen (presidencialismo) que inhibía la nominación de un jefe de gobierno o vicepresidente con mayoría en el Parlamento.[37]

La Unidad Popular (UP) fue una coalición programática y electoral de partidos políticos de centro-izquierda e izquierda que llevó a la Presidencia de la República a Allende con una legitimidad claramente mediatizada, a pesar de que su triunfo fue ratificado en el Parlamento. La UP se formó en diciembre de 1969 con motivo de las elecciones presidenciales de 1970, en reemplazo del FRAP.[38] Estuvo conformada por el Partido Radical, Partido Socialista, Partido Comunista, el Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU), el Partido de Izquierda Radical, y la Acción Popular Independiente, incorporándose la Izquierda Cristiana en 1970 y el Mapu Obrero y

[35] Un interesante análisis de esta época la hacen Tomás Moulián y M.A. Garretón (1993), *La Unidad Popular y el conflicto político en Chile*. Santiago: CESOC-LOM.
[36] Ricardo Yocelevzki (2002), *Chile: Partidos políticos, democracia y dictadura*. Santiago: Fondo de Cultura Económica.
[37] Quien hace un temprano e interesante análisis es Tomás Moulián (1989) en "El régimen de gobierno 1933-1973: Algunos problemas institucionales", Documento de Trabajo FLACSO-Chile 406: 6-10.
[38] Ver, entre otros, Tomás Moulian (2006), *Fracturas: De Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende (1938-1973).* Santiago: Editorial LOM.

Campesino (MOC) en 1973 a partir de una nuevas escisión de la DC. Contó además con el apoyo de la Central Única de Trabajadores (CUT), principal y cuasi hegemónica organización nacional de trabajadores (sus principales dirigentes eran comunistas y socialistas). Se postulaba, sin la necesidad de contar con un partido único, la creación de una nueva fuerza hegemónica que operacionalizara un tránsito democrático hacia el socialismo.[39]

Desde 1952 la izquierda chilena se había propuesto como una meta la posibilidad de alcanzar el poder del Estado por la "vía electoral", para ello fue necesario aceptar y someterse a las reglas del juego, factor que se expresa en el programa de gobierno de Allende al afirmar la absoluta voluntad de respetar la institucionalidad y legalidad vigente. Sin embargo, y como también se sostiene en este programa, su fin último era lograr una nueva institucionalidad que permitiera márgenes mucho más amplios y acordes con una sociedad socialista. Para ello el principal paso era crear una nueva Constitución Política**.**

Los comienzos de esta experiencia fueron difíciles, ya que antes de que el presidente Frei Montalva traspasara el poder a Allende, un grupo paramilitar de derecha, con el apoyo de algunos militares chilenos y de la Central de Inteligencia Americana intentó impedir ese proceso raptando al Comandante en Jefe del Ejército, René Schneider, con el fin de provocar una crisis política. El plan fracasa al morir el general Schneider al intentar evitar su secuestro. Posteriormente, se plantea el "gambito" en el Congreso (elegir a Alessandri, para que renunciará de inmediato y Frei tuviera una nueva oportunidad) y al final se plantea la desestabilización, recibiendo dinero de la CIA con aprobación del Comité de los 40,[40] el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Nacional y otros grupos.[41]

El 4 de noviembre de 1970 y tras ganar con una mínima mayoría relativa (ver Cuadro 6) y tener que ser ratificado por el Congreso como lo estipulaba la Constitución (con el voto DC tras un acuerdo básico, por cierto), el presidente Allende inició su gobierno en medio de un proceso conspirativo que fue acompañado y promovido por el

[39] Ver Rodrigo Baño (2003), (ed.), *La Unidad Popular treinta años después.* Santiago: Editorial LOM.
[40] Heredero del Grupo Especial (1964) y del Comité 303 (1969), este organismo era presidido por el Asesor Presidencial para Asuntos de Seguridad Nacional, el Subsecretario de Defensa, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, el Director de la CIA, el Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, entre otros, y tenía como propósito fijar política y procedimientos frente a asuntos considerados amenazantes.
[41] Genero Arriagada (2000), "Actividades de la CIA en Chile (1963-1973) I.-Los hechos", publicado Informe Nº 5, Política Internacional, *Asuntos Públicos*, pp. 1-11.

Secretario de Estado, Henry Kissinger, y recursos de Estados Unidos y que continuaría su curso en forma creciente hasta el golpe de Estado de 1973.

Cuadro 6
Elección presidencial de 1970

Candidato	Partido	Votos	%
Salvador Allende G.	PS - UP	1.075.616	36.6
Jorge Alessandri	Ind. Derecha	1.036.278	34.9
Radomiro Tomic R.	PDC	824.489	27.8

Fuente: Registro Electoral on line: www.servel.cl

Sin disponer de mayoría en el Congreso (la UP no fue una coalición mayoritaria[42]) y habiendo ganado por mayoría muy relativa lo que le significó darle garantías democráticas a los democratacristianos para su ratificación, Allende lanzó un ambicioso plan de transformaciones económicas que buscaban iniciar el "camino hacia el socialismo" y responder fundamentalmente a los clivajes fundamentales, en particular la relación capital-mano de obra.[43]

El presidente Allende fue claro en respecto a los resultados que quería alcanzar en su gobierno, al decir en el discurso del 5 de septiembre que:

> "(…) La victoria alcanzada por ustedes tiene una honda significación nacional. Desde aquí declaro, solemnemente que respetaré los derechos de todos los chilenos. Pero también declaro y quiero que lo sepan definitivamente, que al llegar a la Moneda, y siendo el pueblo gobierno, cumpliremos el compromiso histórico que hemos contraído, de convertir en realidad el programa de la Unidad Popular".[44]

El programa "refundacional" del presidente Allende, entre otros, incluía mejorar los salarios, garantizar mejores estándares nutricionales (ej. política del medio litro de leche), acelerar y profundizar la reforma agraria iniciada por el presidente Frei Montalva, participación (cogestión) de los trabajadores en las empresas, nacionalización de las industrias estimadas estratégicas como el cobre y los bancos.[45] Este último proceso se hizo, salvo en el caso del cobre donde se logró un acuerdo nacional en el Parlamento, a través de los llamados "resquicios legales" que la Constitución permitía

[42] El apoyo al presidente Allende iba creciendo como se aprecia en las elecciones municipales de 1971 al sobrepasar sus partidarios el 44 por ciento, lo mismo que en las elecciones parlamentarias de 1973, 44,46 por ciento versus el 36.6 de la elección presidencial de 1970.
[43] Ver José del Pozo (2009), *Historia de América Latina y El Caribe, desde la Independencia hasta hoy*, p. 237. Santiago: Editorial LOM.
[44] En es.wikisource.org/wiki/Discurso_de_triunfo_de_Salvador_Allende
[45] Las 40 medidas propuestas en el programa del presidente Allende pueden encontrarse en www. salvador-allende.cl/Unidad_Popular/40%20medidas.pdf

(muchos de ellos eran legados de la República Socialista de los 12 días) pero sin pasar por el poder legislativo.[46] La UP prometió la continuidad de la empresa privada, sobre todo las medianas y pequeñas entidades y, en general, de todas aquellas empresas estimadas no monopólicas.

A estas alturas ya estaba instalado en la arena política un juego de suma cero entre el Ejecutivo y el Parlamento dominado por la oposición, por cierto que iba más allá de la crisis de doble legitimidad de los poderes que trae el presidencialismo. Linz (1990: 63) tipificaba esto último diciendo que "No hay ningún principio democrático que pueda resolver las disputas entre el Ejecutivo y la legislatura acerca de cuál de los dos representa la voluntad del pueblo".

Pese a la furiosa crítica de que fue objeto el presidente Allende por parte de la oposición, la libertad de prensa, de expresión y la existencia de todos los diarios y radios adversos al gobierno fueron rigurosamente respetadas.[47] De este modo, el presidente Allende cumplía su promesa hecha al país (en particular a la DC) de mantener las instituciones chilenas y de abrir el camino a la nueva sociedad, no a través del modelo cubano o soviético, sino siguiendo un camino propio "*con empanadas y vino tinto*", como le gustaba decir. Pero conciliar la amplitud de esas medidas, las que atentaban en contra de la esencia del poder de la clase empresarial y del capital extranjero, con un ambiente pacífico y apegado a las normas institucionales, era buscar algo imposible en un contexto nacional e internacional extremadamente conflictuado con la Guerra Fría.

La oposición para esta fecha (julio de 1972) había formado la Confederación de la Democracia (CODE), que reunía a los partidos políticos de la derecha reagrupados en el Partido Nacional (PN) y a la DC, a la que se sumaban dirigentes gremiales como los comerciantes, camioneros y algunos colegios profesionales. Su principal objetivo era unir a los opositores de la UP, optimizar la obtención de votos y escaños, lograr la mayoría parlamentaria y con ello obtener por los menos dos tercios de los diputados. Su plataforma proponía: a) restablecimiento de la libertad y respecto de los derechos

[46] Manuel Antonio Garretón y Tomás Moulián (1993) "La Unidad Popular y el conflicto político en Chile", *op cit*. Un excelente análisis de este período también está en el trabajo de Ana Henríquez Orrego, "La vía chilena al socialismo. Análisis de los planteamiento teóricos esbozados por los líderes de la Unidad Popular", en http://historia1imagen.blogspot.com/2007/05/salvador-allende-la-via-chilena-al.html

[47] Ver Augusto Varas (1997), "La dinámica política de la oposición durante el gobierno de la Unidad Popular", Documento de Trabajo Nº 43, FLACSO, Santiago. La voluntad del presidente Allende por el respeto a la libertad de expresión también puede ser vista en el intercambio epistolar que tuvo con el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana (SIP) en www.salvador-allende.cl/Documentos/1970-73/allende-sip.pdf

gremiales; b) establecimiento del derecho de información y expresión; c) que el proceso de cambios se encuadre en la Constitución y las leyes; d) término de la violencia; y, e) necesidad de normalizar la situación política del país.

A pesar de que en el CODE existían dos visiones contrapuestas,[48] organizó una campaña de desestabilización que incluyó huelgas (la de los camioneros en octubre de 1972 fue muy importante) y acciones económicas como la del mercado negro y el acaparamiento de mercaderías, factores que provocaron escasez de bienes esenciales y atizaron el descontento de una parte importante de la población. A todo ello se sumó el bloqueo financiero de Estados Unidos, que negaba los préstamos que habitualmente se concedían a Chile. Además, algunas medidas económicas del propio gobierno agravaron la situación.

Empeñado en hacer justicia social y en estimular el consumo, Allende concedió alzas salariales importantes que, si bien generaron euforia y capacidad adquisitiva en muchos sectores, también desataron una espiral inflacionaria que entre 1972 a 1973 llegó a 300 por ciento.[49]

Todo ello preparó el camino al golpe militar, estimulado por el PN, Patria y Libertad[50] y por gran parte de la DC[51] y los otros partidos de la CODE. Entre julio y agosto de 1973 hubo un intento de diálogo entre el gobierno y la DC, bajo los auspicios del cardenal de Santiago, Raúl Silva Henríquez, que no fructificó. La polarización,[52] unido a la nula capacidad de diálogo y a la falta de disciplina y prudencia de algunos

[48] El Partido Nacional y la Democracia Radical como una forma de derrotar definitivamente a la UP, mientras que la DC, el Partido de Izquierda Radical y el Partido Democrático Nacional, como una forma de controlar a la UP dentro del marco legal.

[49] Entre otros, ver Stefan De Vylder (1976), *Allende's Chile: The political economy of the rise and fall of the Unidad Popular*. Cambridge: Cambridge University Press.

[50] El Frente Nacionalista Patria y Libertad fue un grupo paramilitar de ideología nacionalista liderado por el abogado Pablo Rodríguez Grez. Se formó a principios de los 70 como oposición al gobierno de presidente Allende y se disolvió posterior al golpe de Estado de 1973.

[51] Ejemplo de esto es la carta que envió Eduardo Frei a Mariano Rumor, Presidente de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana, justificando el golpe militar ya el 8 de noviembre de 1973. Puede ser encontrada en la sección Memoria Histórica de www.luisemiliorecabarren.cl/?q=node/1358

[52] La situación política en el país era extremadamente tensa y la derecha clamaba por el golpe de Estado. En junio de 1973 el Regimiento Blindado N° 2 se alzó contra el gobierno, los tanques rodearon La Moneda y se produjeron algunos enfrentamientos. Esta situación fue controlada por la actuación del general Prats, quien conminó a los soldados a retornar a su cuartel. Ante la gravedad de los hechos, Allende solicitó al Congreso -sin éxito- la declaración del Estado de Sitio. Luego vendría la reunión de los dirigentes de la ultraderecha Patria y Libertad, Roberto Thieme y Miguel Cessa, y dos oficiales de alto rango de la Armada, quienes informaron que el día 25 de julio de 1973 se iniciaría un nuevo paro nacional y que para incrementar la tensión requerían que Patria y Libertad realizara atentados dinamiteros. Con ello, la facción golpista de la Armada sellaba un pacto con Patria y Libertad. En el día señalado, se inició un nuevo paro indefinido de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile que inmovilizó económicamente al país. Pero se necesitaba algo más. El 26 de julio de 1973 se producía el asesinato del comandante Araya, edecán naval del Presidente Allende.

dirigentes de la propia UP (con un lenguaje en extremo radical formulaban una realidad totalizante muy distante del propio proceso que llevaba adelante la Unidad Popular), fomentaron la asonada que, por cierto, había empezado a tramarse desde el inicio mismo del gobierno de la UP por la oligarquía nacional y el gobierno de Estados Unidos.

El presidente Allende muere el mismo 11 de septiembre de 1973 tras resistir en el Palacio de La Moneda, junto a un grupo de sus seguidores, con la expectativa de que fuerzas leales unidad a sectores populares forzaran a un alto al fuego y se activara un diálogo**.**

El presidente Allende siempre estuvo dispuesto a dialogar y, ante su imposibilidad, por la intransigencia de la derecha y de una DC dominada por los conservadores (guatones) más el golpismo propuesto por Estados Unidos, estuvo decidido a llamar a plebiscito en el mismo septiembre para que la ciudadanía dirimiera el conflicto representado en enfrentamiento político ejecutivo/izquierdsa-parlamento/derecha. Esto último apuró a los golpistas a adelantarlo[53] ante el temor de legitimación del régimen que podía otorgarle el plebiscito en un contexto de adhesión electoral creciente y de respeto institucional (cultura presidencialista).[54]

El corolario fue que, en medio de una escasa y mal organizada resistencia con caóticos resultados (2 mil muertos, miles de apresados y torturados y cientos de exiliados), se ponía fin a la experiencia socialista a la chilena y dejaba de existir una institucionalidad democrática que, con algunos altibajos, había funcionado durante más de un siglo.

El golpe de Estado de 1973 tuvo como propósito, según expresaron públicamente los golpistas, "restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantada".[55] Las FF.AA. complementaron esto diciendo que se trataba de salvar la democracia en peligro del totalitarismo marxista-leninista (Bando Nº 6) y poner punto final al caos político y económico en que se debatía el país. Entre los múltiples "objetivos nacionales," los militares dan la máxima prioridad a la supervivencia de la Nación y también a la supervivencia del Estado que es la base del primer objetivo, justificándose

[53] Ver entrevista de Otto Boye a Tencha Allende (1983), en revista *Análisis*, Número Especial, "Diez Años Después", disponible en http://www.salvador-allende.cl

[54] Sin contar las elecciones de regidores de 1971 donde la UP se impuso con un 50,86 por ciento, en las elecciones de marzo de 1973, planteadas como un plebiscito por la oposición, la CODE consiguió 54,70 por ciento y la UP 43,39. Pero la UP aumentó sus senadores y diputados y la CODE bajó. Así, no se consiguió quórum para acusar constitucionalmente al presidente Allende.

[55] Decreto-Ley Nº 1 de septiembre de 1973.

cualquier medio para tales fines. De esa manera, para la seguridad nacional, los golpes de Estado y los gobiernos militares son recursos justificables.[56]

Para algunos autores como Scully [1990: 18-23] la desaparición del espacio político al centro del sistema de partidos con la polarización a que se había llegado (la DC se había corrido a la derecha desde el centro de la lucha de clases), hace perder ese espacio virtuoso donde se podrían haber logrado acuerdos entre las posiciones más antagónicas con su mediación. Por lo general, el centrismo valora las posiciones consensuales como un fin en sí mismo y el alejamiento de los partidos de centro de este eje, también contribuye al quiebre de la democracia política en 1973. A estas alturas nadie se imaginaba un posterior reencuentro en el centro de los partidos democráticos.

Sin embargo, además se daban otras dos condiciones que favorecieron el golpe. La primera se relaciona al pensamiento militarista de Pinochet a partir de la convicción de que los militares son superiores a los civiles. Su frecuente sorna sobre "los señores políticos" era una clara evidencia de ello. En una oportunidad en 1995, y todavía como Comandante en Jefe del Ejército, señaló: "Nosotros los militares somos distintos de los civiles", por "tradición, formación y disciplina, características que no todos tenemos" (aludiendo a los civiles).[57]

La segunda, se relacionaba a la barrera que dividía a la ciudadanía de sus FF.AA. Al respecto el historiador y ex militar, Julio Busquets, escribía que:[58]

> "Para que un tirano pueda utilizar un ejército contra su pueblo, es preciso separarlo de él, aislarlo, pues si el ejército está unido al pueblo resultará muy difícil poder usarlo contra él. Así lo entendieron ya hace milenios los faraones y los sátrapas orientales; así lo entendieron los emperadores de Roma, que formaron con bárbaros o extranjeros sus legiones pretorianas, y así lo entendieron los reyes absolutistas de la Edad Media, que fomentaban el reclutamiento de tropas extranjeras y dispusieron la rotación de unidades, en las guarniciones, a fin de que, no arraigado en población alguna (...)".

En el caso de Chile, no solo existía la barrera de una subcultura militar, sino que había una geografía divisoria compuesta por el espacio militar (cuarteles, poblaciones,

[56] Ver Frederick M. Nunn (1972), "Military professionalism and professional militarism in Brazil, 1870-1970", *Journal of Latin American Studies*, 4(1): 30-51.
[57] Ver, Raúl Sohr, "La herencia militar de Pinochet", 17 de diciembre de 2006, Archivo Chile, Historia Político-Social–Movimiento Popular, Centro de Estudios Miguel Enríquez (CEME), en www. archivochile.com. Otro trabajo relevante al respecto es el de Carlos Maldonado, "El ejército chileno en el siglo XIX. Génesis histórica del 'ideal heroico', 1810-1885", Centro de Estudios Miguel Enríquez (CEME), en www.archivochile.com/Poder_Dominante/ffaa_y_orden/Sobre/PDffaasobre0015.pdf
[58] Julio Busquets (1984), "El militar de carrera", p. 209. Barcelona: Ariel.

escuelas, casinos, etc.) que la separaban del espacio civil y aún, aunque en menor medida, lo hace. Fernández grafica bien esto al decir que:

> "El aislamiento a que nos estamos refiriendo no es, por lo demás, un rasgo exclusivo de los Ejércitos, sino, por el contrario, de cualquier organización social compleja; como se admite de modo general, las organizaciones sociales complejas tienden a aislarse relativamente del entorno para afirmar así su singularidad, y emplean el secreto como un recurso en su relación con los otros elementos del entorno".[59]

En condiciones de alta modernización y aún no profundizada la industrialización era muy difícil que se mantuviese un régimen democrático por las presiones de lo que Huntington (1972:179) ha llamado el pretorianismo de masas. De acuerdo con este planteamiento, ante la acción política proveniente de sectores populares (expectativas y demandas), los sectores empresariales y tecnocráticos demandan una solución autoritaria. Huntington lo expresa de la siguiente manera: "Los adinerados sobornan, los estudiantes se amotinan, los obreros se declaran en huelga, las multitudes realizan manifestaciones y los militares golpean".

El pretorianismo de masas y la respuesta militar sería consecuencia de dos ideas fuerza: en primer lugar, del convencimiento de que el autoritarismo es necesario para controlar a los múltiples demandantes de prebendas, incluidos los sindicatos y, en segundo lugar, la percepción de que la continuada activación política popular representa una amenaza para el orden social dominante (incluso las bases fundantes). Esto explicaría en el caso de Chile, por ejemplo, la sobrevaloración del orden público por sobre otros derechos incluso en los gobiernos democráticos (Stepan, 1985: 317–345), pero en el fondo también demostraba la fuerza y profundidad de los clivajes que condicionaban la política nacional.

En todo caso, estos regímenes burocrático-militares (autoritario-burocrático como los llamó O'Donnell)[60] que caracterizaron el panorama político del Cono Sur de América en los años sesenta y setenta fueron diferentes de las viejas formas de dominación del caudillo militar o civil. En ellos, las fuerzas armadas no se tomaron el poder para mantener en él a un dictador sino para reemplazar a la clase política

[59] Ver Francisco Fernández Segado, "Fuerzas armadas y sociedad: Del mutuo aislamiento a la progresiva integración", p. 37, en dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=249116
[60] Guillermo O'Donnell (1982), El *Estado Burocrático Autoritario*. Buenos Aires: Editorial de Belgrano.

tradicional con el propósito de reorganizar al Estado-Nación en su totalidad de acuerdo con la ideología de la "Seguridad Nacional"[61] propia de la Guerra Fría.

2.4 La erupción de la fractura original (1973-1990)

El conflicto de fondo era la distancia ideológica y el sentido refundacional que se había expresado en el proyecto de la Unidad Popular, más que las características institucionales propias de un régimen presidencial o la formación de un gobierno no mayoritario en caso de Chile. En otros países de la región esto se complementaba con escenarios propensos a las intervenciones militares (Cheibub, 2002: 294-302 y 2007: Cap. 6, citado en Munck, 2010: 588).

El régimen militar instaurado en Chile en 1973 intentaría eliminar el empate político a través de dos mecanismos: la normalización de la economía y el restablecimiento del orden (Lopreite y Tula, 1996: 291-303). Jorge Arrate (2004: 7) lo explica en estos términos: "Autoritarismo político y mercantilismo económico son los dos rasgos del régimen de Pinochet que, en simétrica oposición al proyecto de Allende, establece el maridaje entre dictadura y capitalismo salvaje en sustitución al de democracia y socialismo".

Al cabo de unos meses, comenzaba a quedar en evidencia que el gobierno militar no sería una instancia transitoria. Su posesión del poder pasaba rápidamente a transformarse en uno más permanente y fundacional, a pesar de que el propio Pinochet afirmó el día 16 de septiembre de 1973 que "Chile volverá a su tradicional sistema democrático".[62] Esta fijación de metas sin plazos quedó manifestada tempranamente en lo doctrinario (11 de marzo de 1974) cuando el general Pinochet lee ante el país dos documentos: la "Declaración de Principios" que sembraba las bases de una nueva institucionalidad y el "Objetivo Nacional" que delineaba las transformaciones necesarias para un nuevo plan económico.[63]

Para operacionalizar los objetivos de este proceso radical de cambio en el ámbito político, se aprobó el Decreto Ley N° 778 que confería a la Junta de Gobierno la potestad de modificar a su arbitrio la Constitución de 1925 y se empoderó la figura del

[61] Ver Jorge Tapia Valdés (1980), *El terrorismo de Estado: La doctrina de seguridad nacional en el Cono Sur*. Ciudad de México: Editorial Nueva Sociedad y Editorial Nueva Imagen.
[62] *El Mercurio,* 17 de septiembre de 1973, p. 13.
[63] Cristián Gazmuri, "*El lugar de Pinochet en la historia. Una interpretación política de la experiencia autoritaria. 1973 – 1990*", *La Tercera,* "Reportajes", 12 de septiembre de 1999, pp. 4-11.

general Pinochet al otorgársele poderes concentrados:[64] siguió como Comandante en Jefe del Ejército (la principal rama de las FF.AA.) y se hizo nombrar Jefe de la Junta Militar (era el Poder Legislativo de entonces) y posteriormente Presidente de la República (Poder Ejecutivo).[65]

A pesar de que Pinochet fue exitoso en apropiarse de un poder desmesurado, este no estuvo exento de conflictos con los otros miembros de la Junta Militar y sus ramas. Estas resistencias e interpelaciones de parte de los otros miembros tuvieron varias escaramuzas y al menos tres momentos (clímax) relevantes.

El primero de estos conflictos como se mencionó fue la concertación de poderes en manos de Pinochet. Samuel Valenzuela (1997: 4-5) reafirmando ciertos trazadores decisionales del path dependence como las nociones constitucionalistas de la cultura estratégica chilena (en este caso el presidencialismo de las constituciones anteriores), afectaron la forma organizacional que adquirió el régimen militar, por cierto en favor de Pinochet:

> "(...) por ser el jefe de la rama más antigua de las FF.AA., se convirtió desde el comienzo en el 'Presidente de la Junta de Gobierno', y a pesar de que esta presidencia debía rotar cada año...Pinochet comenzó a actuar cada vez más como el titular del poder Ejecutivo, es decir, como el Presidente de la República. Al mismo tiempo, empezó a establecer la idea de que la Junta de Gobierno constituía el poder Legislativo, a pesar de que el propio Pinochet era uno de los miembros (...) (Así) quedaba así en una situación única: un integrante indispensable del legislativo, y simultáneamente la cabeza del ejecutivo. Para formalizar esta división de poderes (...) a fines de junio de 1974, el gobierno militar adoptó...(iniciativa de Pinochet) el 'Estatuto Jurídico de la Junta de Gobierno'(...) (Este) tuvo el carácter de una virtual constitución provisoria; con él Pinochet lograba establecer *de jure* la definición que había impuesto de facto de la separación de poderes en la Junta Militar como una forma de consolidar su ejercicio exclusivo de la presidencia (...) no satisfecho con esto (...) en diciembre de 1974 un nuevo Decreto-Ley le dio además el título explícito de 'Presidente de la República (...) Usó la tradición constitucional presidencialista del país para ensalzar sus propias atribuciones y para relegar a sus colegas (...) a un poder subalterno, es decir, a un poder legislativo muy aminorado por la presencia en él del propio titular del ejecutivo con derecho a veto'".

[64] Inicialmente se había informado que las FF.AA. gobernarían en conjunto, alternándose los comandantes en jefe de las distintas ramas (incluyendo Carabineros) a la cabeza del poder Ejecutivo.

[65] Pinochet había logrado convertirse en el hombre fuerte tempranamente, al ser declarado el 26 de junio de 1974 (Decreto Ley N°527) cabeza del Ejecutivo con el título de Jefe Supremo de la Nación. En diciembre de ese año se cambiaría la denominación de su cargo por el tradicional, Presidente de la República.

El segundo es por la salida del general Gustavo Leigh del mando de la Fuerza Aérea, hecho que se genera tras la crítica entrevista concedida al periódico italiano Corriere della Sera. En julio de 1978, la Junta de Gobierno, reunida en el Ministerio de Defensa, le pidió la renuncia al general Leigh. Ante la negativa de éste, la Junta lo declaró "imposibilitado para ejercer sus funciones", fundándose en el Decreto Ley Nº 527, de 1974, y fue reemplazado por el general de Brigada Aérea (A) Fernando Matthei.[66] Para Leigh, tal nombramiento constituyó una sorpresa, pues "Matthei siempre se había considerado amigo mío y fue un general normal hasta el día en que Pinochet lo convenció de que me reemplazara a mí. Y él no me dijo una palabra. Yo lo mandé a citar al Ministerio y no concurrió. O sea, me jugó mal, no esperaba yo de un general FACH una actuación como la de él".[67]

Por último, y como se analizará más adelante, en la imposición del resultado verdadero del plebiscito de 1988 por parte del mismo Matthei y el general Director de Carabineros, Rodolfo Stange, versus la versión que quería imprimirle La Moneda y Pinochet en particular.

Al igual que lo sucedido en Argentina,[68] el régimen militar se propuso refundar el país a través de lo que Stepan (1973: 47-53) llamó un nuevo profesionalismo, donde la democracia representativa y los partidos políticos eran secundarios en la unión entre tecnócratas y militares: la apuesta de fondo era que estos últimos adquiriesen destrezas político-gerenciales de modo de suplir a los primeros.

Irwin y Micett comparan cinco categorías claves entre el nuevo profesionalismo de Stepan y el viejo de Huntington: a) funciones dominantes de la estructura militar, donde según el viejo profesionalismo lo característico era la seguridad exterior, mientras que en el nuevo la seguridad interna es prioritaria; b) las destrezas militares en el viejo profesionalismo son altamente especializadas e incompatibles con las destrezas de carácter político, en el otro están altamente interrelacionadas; c) en el viejo el campo de acción militar es restringido, en el nuevo no; d) el impacto de la socialización en el viejo profesionalismo logra "una neutralidad política", mientras en el nuevo se politiza el

[66] Pinochet amenazó fagocitar a la FACH entre el Ejército y la Marina si Matthei no aceptaba reemplazar a Leigh en el mando de la Fuerza Aérea.

[67] Esto fue ratificado por el general (R) Gustavo Leigh en una entrevista hecha en Televisión Nacional de Chile, 29 de septiembre de 1999 por José Ignacio Aguirre. La reunión final de la Junta también ha sido relatada en Ascanio Cavallo, Manuel Salazar y Oscar Sepúlveda (1997), *La historia oculta del régimen militar*. Santiago: Editorial Grijalbo.

[68] El general Jorge Rafael Videla, líder del golpe de Estado en Argentina en 1976, argumentó que su movimiento era "más que la mera deposición del gobierno, era la clausura final de un ciclo histórico y el inicio de otro, cuyas características fundamentales se manifestarían en la reorganización del país".

sector; y, e) en el plano de las relaciones civiles-militares, en el viejo se favorece el control civil y el carácter apolítico de los militares, mientras que en el nuevo se produce un efecto contrario y que contribuyen a un papel expansivo de gerencia política por parte del sector militar.[69]

Este papel formativo del nuevo profesionalismo para civiles y militares estuvo a cargo en Chile de la Academia Superior de Seguridad Nacional repotenciada por Pinochet en 1974, hoy Academia Nacional de Estudio Políticos y Estratégicos – ANEPE[70] y de la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) como veremos más adelante.

Este cambio de rol se explica en el contexto de la revolución capitalista en marcha (autonomización de los mercados a escala internacional), cuyo propósito era combatir el keynesianismo y el Estado de Bienestar a través de una ideología hegemónica: el neoliberalismo. Esta ideología (Garretón, 2012: 23-28), a grandes rasgos, proponía, primero, el individualismo extremo. Es decir, el individuo como responsable de sus actos y de los resultados, y "al perseguir sus propios intereses promueve a menudo los de la sociedad en un modo más efectivo que cuando intenta hacerlo directamente".

En segundo lugar, se postula la primacía de la libertad, pero anclada y amalgamada con la ausencia de impedimentos externos al libre desarrollo del mercado (libertad económica como vital para la libertad política).

Tercero, el mercado como lugar principal de la práctica de la libertad y ordenador racional por excelencia. Manifestación que lleva adosada fuertemente un sentido antiigualitarista.

Cuarto, "el individualismo neoliberal considera la desigualdad una cuestión natural. Las desigualdades sociales son inevitables, pues son la expresión de las diversas capacidades de adaptación de los individuos ante el mercado". Por lo mismo se genera un orden espontáneo.

Quinto, el modo de producción capitalista es visto como el motor de la historia y, por lo mismo, insuperable.

Por último, la intervención estatal es vista como atentatoria contra el orden social de mercado como eje constitutivo de las sociedades. Sin embargo, la imposibilidad de

[69] Ver Domingo Irwin e Ingrid Micett (2008), *Caudillo, militares y poder: Una historia del pretorianismo en Venezuela*, Universidad Católica Andrés Bello, p. 251.

[70] Ver Mladen Yopo y Sergio Prince (2010), "Desde la seguridad nacional a la complejidad transdisciplinaria de la seguridad y la defensa. El caso de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos", en Sonia Alda Mejías (ed.), *Sistema de enseñanza militar y educación para la defensa en Iberoamérica*, pp. 261-292. Madrid: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.

eliminar el Estado, los lleva a proponer un Estado mínimo (prestar seguridad) y subsidiario en al perspectiva de intervenir solo en aquellos nichos que no son de interés de los capitalistas privados.

Hasta 1980, Pinochet gobernó sin especificar por cuánto tiempo estaría en el poder. Sin embargo, tempranamente anunció la institucionalización del proceso en el contexto de una necesidad legitimadora y del eje constitucional de la cultura estratégica. Así, al conmemorar el segundo aniversario de la toma del poder en 1975, Pinochet señaló:

> "La Honorable Junta de Gobierno ha acordado dictar, en el ejercicio de su potestad constituyente, y antes de fines del primer semestre del año próximo, tres Actas Constitucionales: La primera, referente a las Bases Fundamentales de la Nueva Institucionalidad; la segunda, sobre Nacionalidad y Ciudadanía; y la tercera, sobre Derechos y garantías constitucionales y Regímenes de Emergencia. En ellos se recogerá así los valiosos trabajos que ha estado desarrollando la Comisión de juristas encargada de preparar un anteproyecto de nueva Constitución Política del Estado".[71]

La incapacidad del régimen para cumplir con el objetivo transformador de la estructura económica unido a las flagrantes violaciones a los derechos humanos, generaron un debate dentro del núcleo del gobierno militar referente a la necesidad de mejorar la imagen del régimen y ampliar las bases de su legitimidad mediante alguna forma de institucionalización.

El debate se estructuró en torno a dos posturas enfrentadas: mientras los llamados duros procuraban la continuidad indefinida del régimen, sin condicionamientos temporales, el sector de los blandos consideraban que era necesario definir algún tipo de marco institucional que sentara las bases para la reintroducción de algunos elementos de democracia en un futuro. Vale decir que el debate se centraba en lo referente al marco dentro del cual se desenvolvería el régimen, sin que esto significara un cuestionamiento al liderazgo de Pinochet (Lopreite-Tula, 1996: 295) o al modelo que proponía.

Con el triunfo de los blandos, la Comisión Fernández fue la encargada de redactar la nueva Constitución, la que fue aprobada en 1980 en un plebiscito que se realizó sin ninguna transparencia (no había registros electorales) y sin posibilidades de que la oposición pudiera manifestarse abiertamente (Cuadro 7). Según esa nueva Carta Magna, no sólo se legalizaba el modelo neoliberal, sino que se avalaba para que Pinochet gobernara ocho años más hasta 1988, y ese año se haría un nuevo plebiscito en el que se

[71] Véase Alejandro Silva Bascuñan (1997), *Tratado de Derecho Constitucional*, pp. 187-188. Santiago: Editorial Jurídica.

decidiría si el dictador seguía en el poder por otro período o si debían celebrarse elecciones libres.

Jaime Guzmán (1979: 58-59), abogado cercano a la junta militar, justifica la transformación diciendo: "una Constitución debe responder a los desafíos que le plantea la realidad concreta que está llamada a regir, y resulta incuestionable que después de la experiencia vivida por Chile durante el gobierno marxista, no adoptar las providencias necesarias que dificulten su repetición, constituiría una irresponsabilidad suicida".

Cuadro 7
Plebiscito de 1980

Votantes	6.271.869	100%
Opción Sí	4.204.897	65,71%6
Opción No	1.893.420	30,19%
Votos Blanco (se sumaron al Sí)	83.812	1,33%
Votos Nulos	173.569	2,77%

Fuente: Registro Electoral on line: www.servel.cl

El mismo Guzmán ([1980/1991: 383 y ss) precisó las direcciones de la nueva democracia que proponía la Constitución de 1980 al decir que "la definición de la democracia que el general Pinochet expuso (...) estaba muy lejos de esta concepción ampliamente socializada, pues entrañaba una idea ajena a la tradición chilena. Y, además, ajena al concepto y a la práctica de las democracias pluralistas occidentales. Se trataba de una democracia 'protegida'. Más precisamente, 'autoritaria, protegida, integradora, tecnificada y de auténtica participación social".

Respondiendo a la cultura estratégica nacional y reiterando lo expresado por Samuel Valenzuela, "cada paso dado en la organización interna del gobierno militar se hizo sobre la base de un texto legal. Con ello se trataba de mantener una correspondencia bastante estricta entre las prácticas y los textos legales, correspondencia que fue siempre un ingrediente importante en la legitimidad del poder en Chile. Este legalismo le permitía al gobierno militar gobernar a través de toda suerte de normas que la administración pública, el poder judicial, y la contraloría seguirían cumpliendo, como les era usual. En este sentido cambió poco el funcionamiento burocrático del Estado chileno bajo el gobierno militar, a pesar del drástico cambio de régimen" (1997: 7). Esto le sirvió para establecerse, organizarse y lograr un grado de estabilidad ("legitimidad") que lo blindaba en cierta medida de las presiones internacionales y de la oposición interna.

En 1978, sin embargo, ya operaba un grupo de abogados de diversa militancia partidaria pero de fuerte convicción democrática que serviría como un semillero práctico y teórico para la posterior formación de la Concertación: el llamado "Grupo de los 24". Con Manuel Sanhueza, Patricio Aylwin, Edgardo Boeninger, Raúl Retting y Carlos Briones, entre otros, estos abogados ofrecían una constitución alternativa a la de la Comisión Fernández, la que consideraban antidemocrática. Según uno de sus principales integrantes, el demócrata cristiano, Francisco Cumplido, expresaba que:

> "La nueva Constitución rechaza el sistema representativo de gobierno, desconoce el derecho natural y exclusivo del pueblo para gobernarse, niega el pluralismo ideológico, establece un régimen político militarista, implanta un verdadero cesarismo presidencial, minimiza al Parlamento, transforma al Tribunal Constitucional en un organismo burocrático carente de representatividad popular y más poderoso que el Congreso, otorga un poder ilimitado a las FF.AA., subordina la vigencia de los derechos humanos fundamentales al arbitrio del gobierno y se identifica, en lo económico, con el capitalismo individualista de libre mercado. Además, dadas las exigencias que le impone para eventuales reformas constitucionales, perpetúa un determinado régimen político, económico y social, que resulta prácticamente imposible de modificar. De esta manera, la Constitución de la Junta Militar niega la democracia y (lo más grave) cierra los caminos para instaurar la democracia dentro de la legalidad que ella consagra". [72]

En este acto plebiscitario si bien no se logró hacer fracasar el intento de institucionalización del régimen autoritario, como sí lo hizo la ciudadanía uruguaya en el plebiscito de ese país del mismo año, donde ganó el No por ciento por aprobar una nueva constitución (56,83 a 42,51 por ciento) y obligó a un posterior diálogo entre las FF.AA. y sectores políticos tradicionales (partidos Colorado, Nacional y Unión Cívica), se sentaron otros precedentes que resultaron relevantes para el posterior retorno democrático en Chile. Así y a pesar de lo manipulado, controlado y represivo del proceso plebiscitario chileno,[73] quienes se opusieron lograron la nada despreciable suma de 1.893.420 votos (30,19 por ciento) sentando desde un principio un aura de cuestionamiento del proceso y del instrumento aprobado. También se empezó a

[72] Ver a Francisco Cumplido Cereceda (2000), "*Reforma constitucional en Chile*", publicado en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, pp. 317-332 y reproducido en www.juridicas.unam.mx. También ver Grupo de Estudios Constitucionales: "Las críticas del Grupo de los 24", en *Revista APSI* 10 al 23 de marzo, Dossier, 1981, p. 11.

[73] Como lo expresan numerosa organizaciones de derechos humanos, este proceso se lleva a cabo sin registro electorales, sin partidos políticos y, por cierto, sin observadores internacionales ni de los partidos. Además se realiza en un clima de miedo que anuló casi por completo cualquier intento de discusión o debate del asunto. La falta de salvaguardas para la equidad del plebiscito, da paso para la consagración de un enorme fraude. Ver Human Rights in Chile: The Legacy en www.chipsites.com/derechos/1980 _esp.html

contrarrestar el miedo y la inactividad que produce este estado emocional con la campaña en contra. Por último, se extendieron los escasos espacios de encuentro y discusión, teniendo todo esto el efecto positivo germinal de empezar a reinstalar y relegitimar la actividad política.

En este último punto (resultado político del plebiscito), por tanto, tengo un leve matiz de diferencia con el trabajo comparativo de María José Romero (2009: 120 y ss) de la transición en Chile y Uruguay a partir de los marcos político-institucionales en que se dan estos eventos. En particular, relevaría el peso relativo menor que le da a otros factores como la profundidad de la fractura originaria, la correlación de fuerzas internas, la estructura de la propia dictadura y la profundidad de sus desarrollos, entre otros, y que para mí explican en gran media la divergencia de resultados-caminos de ambos plebiscitos. En Chile y a pesar de las similitudes histórico-sociales con Uruguay, se había producido una despiadada y muy represiva contrarrevolución conservadora con apoyo de una parte importante de la población y en el marco de una cultura estratégica distinta.

La esencia de la forma de dominación de la dictadura chilena, amparada en el doctrina de la Seguridad Nacional y al igual que el resto de los regímenes de facto en la región, fue la represión que más tarde se combinaría con un nuevo paradigma ideológico-cultural. Esto, en cifras, dejó a más de tres mil personas muertas o desaparecidas, la mayoría durante los dos primeros años; cientos de miles sufrieron la tortura; decenas de miles partieron al exilio; y, millones sufrieron otro tipo de arbitrariedades (estados de excepción, amedrentamiento, arbitrariedades, etc.).

Incluso algunos chilenos ni siquiera estuvieron a salvo en el exilio del terrorismo de Estado que impulsó la dictadura, como se constata con los asesinatos del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en Buenos Aires (1974) y del ex canciller de Allende, Orlando Letelier y su secretaria Ronni Moffit en Washington (1976), con el atentado que sufrió en Roma Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno (1975) o las acciones de los servicios secretos que se extendían por todos el Cono Sur del subcontinente a través de la llamada "*Operación Cóndor*", entre otros.[74]

Algunos de los partidos políticos fueron declarados en receso (los de la derecha y la DC) y otros llanamente proscritos y sus miembros perseguidos (los de la izquierda); el Parlamento simplemente se cerró. Los sindicatos no fueron prohibidos, pero los llevaron

[74] Ver J. C. Gutiérrez Contreras y Myrna Villegas Díaz (1999), "Derechos humanos y desaparecidos en dictaduras militares", *KO'AGA ROÑE'ETA* se.vii, en http://www.derechos.org/koaga/vii/ contreras.html

a una existencia muy limitada al sufrir también la persecución. Los jueces seguían constituyendo un poder autónomo en teoría, pero en la práctica se limitaban a corroborar lo que el régimen autoritario decidía. En relación a esto último, por ejemplo, ya el 13 de septiembre de 1973 la Corte Suprema de Justicia declara su apoyo al golpe de Estado en un documento suscrito por su presidente de entonces, Enrique Urrutia Manzano.[75]

El poder judicial fue el único poder del Estado que no fue disuelto después del golpe, en buena medida por la afinidad de sus miembros con la ideología que se instauraba y para mantener la tradicional apariencia de legalidad, además de que no cuestionó los abusos y violación de los derechos humanos (si la justicia hubiese aceptado los recursos de amparo presentados muchas vidas se podrían haber salvado). Recién en septiembre del 2009, y en fallo dividido, por primera vez la Corte Suprema de Justicia en la causa por torturas con lesiones graves en contra de 17 personas que estuvieron recluidas en la Academia de Guerra Aérea entre el 11 de septiembre de 1973 y enero de 1975 (causa rol 8113-2008) determina que las torturas son crímenes de lesa humanidad, al igual que los delitos de secuestros y homicidios calificados.[76]

La profundidad y métodos de la refundación conservadora, como se vería ya con claridad en el plebiscito de 1980, fue simplificando el escenario motivacional de los actores políticos y, por lo mismo, la fijación de una agenda para un cambio al sentar como eje de la disputa la pregunta ¿dictadura o democracia? Esto, unido al reencuentro del humanismo cristiano y laico frente al sufrimiento, facilitaría un trabajo conjunto de los partidos opositores democráticos y que concluiría en la conformación de la Concertación.

Aunque la mayoría de los principales cargos en el gobierno estuvieron en manos inicialmente de los militares (incluso hubo rectores de universidad que eran almirantes o generales), el poder se ejerció con la estrecha y vital colaboración de algunos políticos tradicionales de la derecha que sirvieron como ministros, asesores o embajadores y de nuevas caras provenientes de una derecha profesionalizante, sin partido y más académica, pero igualmente ideologizada: el gremialismo.[77] Estos jóvenes de derecha formados en la Universidad Católica de Chile y dirigidos por el entonces estudiante y luego profesor Jaime Guzmán, un conservador devoto y crítico de la democracia liberal,

[75] www.archivovicaria.cl/archivos/1973-1976.pdf
[76] Ver diario electrónico *El Patagónico*, 25 de septiembre del 2009.
[77] Interesante al respecto resulta el libro de Patricio Silva (2010), *En nombre de la razón. Tecnócratas y política en Chile.* Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales.

bajo el discurso de apoliticismo, sostuvieron en un comienzo ideas próximas al franquismo de la primera época, para ir derivando, después de 1973, hacia una "democracia protegida". Serían el núcleo pensante del régimen militar y estarían tras la institucionalización del mismo a través de la Constitución de 1980.[78]

Los empresarios tampoco disimularon su apoyo a la dictadura, particularmente las grandes organizaciones empresariales como la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA). "El proyecto de esta nueva derecha se fundaba, entonces, en la combinación de un semiautoritarismo político, una economía liberal, una sociedad jerarquizada y una cultura conservadora" (Gazmuri 2001: 3).[79]

El gobierno de Pinochet, entonces, fue una experiencia cívico-militar de "colaboración pragmática" al contar con el apoyo de un sector importante de la sociedad civil, especialmente el de los propietarios del capital y la derecha política (además de uno que otro DC).[80] La derecha y los militares se necesitaban mutuamente: los militares pondrían la autoridad y el orden, y los políticos (...) de derecha el proyecto político (Gazmuri 2001: 3).

Esta nueva ecuación de poder, por otra parte, se complementaba con "la afinidad electiva que se ha dado históricamente entre militares y tecnócratas", al demostrar compartir "un rechazo por la política de partidos y una fe en soluciones técnicas y 'aparentemente' apolíticas para los problemas nacionales", aunque no necesariamente los tecnócratas se anclan solamente a fórmulas de tipo autoritaria. También hay un desarrollo tecnocrático en la propia Concertación, representado, por ejemplo, en los ministros de Hacienda pos dictadura.[81]

Al respecto, comparto plenamente la definición de tecnócrata que plantea Patricio Silva cuando expresa que son:

---

[78] Ver, entre otros, Carlos Hunneus (2007), *The Pinochet regime*. Boulder: Lynne Rienner Publishers; Verónica Valdivia (2008), *Nacionales y gremialistas*. Santiago: Editorial LOM; Renato Cristi (2000), *El pensamiento político de Jaime Guzmán. Autoridad y libertad*. Santiago: Editorial LOM; y Rosario Guzmán Errázuriz (1991), *Mi hermano Jaime*. Santiago: Editorial Ver.

[79] Ver también Guillermo Campero (1995), "Entrepreneurs under the military regime" en Paul W. Drake and Iván Jaksić (eds.), *The struggle for Democracy in Chile*. Lincoln, Nebraska: University of Nebraska Press.

[80] Entiendo como coalición pragmática una alianza entre actores y/o partidos políticos con diferente identidad, pero ideológicamente afines, que comparte un programa común que recoge el proyecto que proponen para el país.

[81] Ver Patricio Silva (1997), "Ascenso tecnocrático y democracia en América Latina", *Nueva Sociedad* 152: 69.

> "...individuos con un relativamente alto nivel de entrenamiento académico especializado, particularmente en los terrenos de la economía y la ingeniería, que parten del principio de que la mayoría de los problemas de la sociedad pueden ser resueltos a través de métodos científicos y técnicos. En general, descartan la política y la participación ciudadana en la resolución de dichos problemas. En su opinión, sólo los poseedores de dichos conocimientos científicos específicos estarían en óptimas condiciones de formular y aplicar soluciones coherentes y sustentables".[82]

El resultado de esta ecuación, entonces, explica que en la política económica de la dictadura se privatizaron muchas empresas que habían pertenecido al Estado desnaturalizando el sentido de pertenencia incluso que tenían y defendían las propias FF.AA., y se abrieron también muchos servicios a la empresa privada, como la salud, los seguros y la educación (así surgieron muchas universidades privadas).

También se terminó con la política de fijación de precios de los artículos de consumo básico, dejándolos fluctuar libremente. Las tierras que habían sido expropiadas durante la reforma agraria de los gobiernos de los presidentes Frei Montalva y Allende no siempre fueron devueltas a sus antiguos propietarios, sino que fueron en parte rematadas, creándose un núcleo de nuevos empresarios agrícolas. Además, se buscó el equilibrio fiscal, disminuyendo el gasto público. Se abrió la puerta a la inversión extranjera, aunque ella no llegó en grandes proporciones. Chile se retiró del Pacto Andino (hoy Comunidad Andina de Naciones - CAN), para tener mayor libertad de acción y poder rebajar las tarifas aduaneras para practicar una política más liberal en su comercio exterior (se redujeron los aranceles de un máximo histórico del 94 por ciento en 1973 a una media del 10 por ciento en 1979).

Todas estas medidas eran un cambio importante en relación a las últimas cuatro décadas antes de 1973, durante las cuales el Estado había jugado un papel tanto o más importante que la empresa privada en el desarrollo y estabilidad nacional.[83] Sin embargo, estos cambios estuvieron desde un principio alentados y apoyados, además del contexto político autoritario, por Estados Unidos y otros países desarrollados, a la vez de amplio respaldo técnico e intelectual que le entregaba el Fondo Monetario

[82] Ibid, p. 69.
[83] Dentro de las pocas empresas que no fueron privatizadas fue Codelco. Sin embrago, en 1974 un ministro civil casi recién asumido en el cargo, por cierto de tendencia neoliberal a ultranza, propuso al Comité Asesor la privatización de la empresa nacional del cobre. Solo la oposición tenaz de parte de militares de alta jerarquía, como la del general Gastón Frez, detuvo esta privatización.

Internacional y el Banco Mundial.[84] Como se aprecia, el golpe militar en Chile era parte de un proceso más global.

Adhiero plenamente con diversos autores cuando plantean que la privatización de las principales empresas, en especial la salud y el sistema de pensiones, eran más que una decisión económica al constituirse en una forma de construcción institucional anclada en la gobernabilidad y el anticomunismo.

En el caso del sistema de pensiones, por ejemplo, su traslado al ámbito y lógica del mercado forzaría a las fuerzas laborales organizadas a aceptar las políticas macroeconómicas a la vez de quitarle capacidad de presión, principalmente al sector fiscal. Estos fondos hoy juegan un papel fundamental en la economía y en la política, al estar sus fundadores en la mayoría de los puestos directivos de estas administradoras y en otras empresas relacionadas a los fondos, además de pertenecer a las elites de los partidos de la derecha. Lo mismo ha sucedido en las otras áreas de la economía, especialmente la dedicada a los servicios y la producción dirigida a las exportaciones (Trocal y Mainwaring, 2003: 69-70).

Hunneus (1998: 130-131) grafica bien esto al decir, que:

> "(...) el cambio económico estuvo guiado por el interés de alcanzar ciertos objetivos políticos, que consistían en establecer nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad, de manera que se crearan las condiciones que aseguraran que la misma coalición gobernante se mantuviera como una fuerza dominante bajo un régimen competitivo. Los 'gremialistas' coincidían con los militares en el sentido de que el cambio económico y político implicaba una rectificación decisiva del curso de la historia de Chile, que debería concluir en el restablecimiento de las elecciones competitivas que dieran origen a un gobierno que fuera controlado por la misma coalición gobernante. La consolidación de reformas económicas daría una legitimación por el rendimiento al régimen autoritario porque la mayoría de la ciudadanía se beneficiaría con sus resultados, apoyando su continuidad en las elecciones que se realizarían en algún momento cuando fuera necesario que dejara de ser régimen militar y se convirtiera en uno competitivo".

Chile fue el único país donde la revolución neoliberal se ejecutó de manera férrea y sostenida, es decir, se aplicó el modelo neoliberal a sus anchas, realidad que aún mantiene firme su columna vertebral graficada en el clivaje entre propietarios del capital y prestadores de mano de obra (la clásica lucha de clases de Carlos Marx), por ejemplo,

[84] Ver el artículo de Bárbara Stallings (1992), "International influence on economic policy", en Stephan Haggard y Robert R. Kaufman (eds), *The Politics of Economic Adjustment*. New Jersey: Princeton University Press.

al no revisarse las privatizaciones de bienes estatales, la mantención de pilares como las AFP e Isapres o las leyes laborales restrictivas con los derechos laborales o los negocios de civiles y militares (con el costo de desnaturalizar a estos últimos), todos de signos muy contradictorios y que sustentan a una nueva clase económica con grandes ganancias e impacto en el poder nacional (ver, por ejemplo, ganancias acumuladas de las AFP de casi 5 mil millones de dólares en Cuadro 8).

Cuadro 8
Evolución de las utilidades del sistema de AFP, en pesos diciembre 2012

Año	Utilidades	Utilidades Acumuladas
1981 -1989	$ 93.577.098.265	$ 93.577.098.265
1990 - 999	$ 429.274.342.348	$ 522.851.440.613
2000	$ 171.773.342.348	$ 694.624.834.371
2001	$ 133.393.129.729	$ 828.017.964.163
2002	$ 123.319.555.356	$ 951.337.519.519
2003	$ 118.501.215.876	$ 1.069.838.735.395
2004	$ 110.312.546.145	$1.180.151.281.540
2005	$ 102.459.418.906	1.282.610.700.446
2006	$ 107.318.819.598	$ 1.389.929.520.044
2007	$ 104.250.896.018	$ 1.494.180.416.062
2008	(-) $ 8.956.035.881	$ 1.485.224.380.181
2009	$ 195.015.307.644	$ 1.680.239.687.825
2010	$ 293.335.673.877	$ 1.973.575.361.702
2011	$ 217.101.707.670	$ 2.190.677.069.372
2012	$ 288.966.280.000	$2.479.643.349.372

Fuente: Fundación SOL en base a datos de Superintendencia de Pensiones y AFP's.

El mismo Hunneus nos recuerda, y yo concuerdo plenamente con él, que el neoliberalismo es una cosmovisión similar al marxismo: trata de explicarlo todo a partir de la economía. Con el mercado como centro, concibe al ciudadano como un consumidor que se guía por las apariencias y por el precio, y ve a las instituciones políticas como organizaciones económicas movidas por la "eficiencia". Los ciudadanos (consumidores) estarían solo preocupados de cosas "concretas", dando a entender que no se interesan por bienes no-materiales, como los valores, la calidad de vida, la seguridad. En ese discurso, las organizaciones "tradicionales" (partidos, parlamentos,

grupos de interés, etc.) son vistos con sospecha y desconfianza, reduciendo su espacio de acción a temas muy generales, de manera de no interferir en el proceso económico.[85]

Por lo mismo, y como se expresó con anterioridad, el discurso neoliberal sostenía (y aún lo hace) que las reformas económicas de los "Chicago boys" eran neutrales políticamente y estaban destinadas a servir el bien común y ayudar a la democratización de Chile en base a derechos económicos y no políticos. Esa política introdujo profundas reformas económicas que tuvieron como efecto la transformación del sector económico hacia una racionalidad que privilegió la eficiencia, el lucro y la libertad empresarial, transformación que se apoyaron en un contexto político que privilegió la irracionalidad de un orden político que aplicó una altísima coerción, principalmente por parte de los organismo de seguridad a través de las políticas represivas, con altísimos costos humanos y heridas que aún no han cicatrizado.

Incluso y a pesar de no justificar la violación a los derechos humanos, el propio Jaime Gúzman justificaba el contexto e instrumentos jurídicos que lo posibilitaban como los estados de excepción cuando "las sociedades atraviesan convulsiones o desafíos agudos que así lo requieren" (Hunneus, 1988: 143).

En este estado dual (liberal en lo económico y represivo en lo político) se enfatizó el carácter "técnico" de la ciencia económica, cuyas leyes conocía y aplicó con entera discrecionalidad el equipo económico de la dictadura. Hunneus agrega que:

> "(…) los principales actores fueron los empresarios privados, que estaban identificados con ese sistema político, muchos de los cuales fueron altos funcionarios públicos que se beneficiaron de las privatizaciones y los trabajadores fueron excluidos y los dirigentes sindicales, perseguidos. Como la crítica económica fue la única permitida, la oposición privilegió la crítica al modelo económico y especialmente a sus privatizaciones, de manera que, para una amplia cantidad de chilenos que estaban en contra de la dictadura, la política económica fue vista negativamente. Aquí se encuentra una de las fuentes de baja legitimidad del orden económico...". [86]

El cambio económico, entonces, se guió claramente por objetivos políticos y ellos estaban dirigidos a contribuir a la legitimación por el rendimiento de la democracia protegida, complementando así la estrategia de legitimación legal que se impulsaba a través de la preparación de una nueva Constitución. La integración de ambas legitimidades las hizo el "gremialismo", a través de sus principales dirigentes: Miguel

[85] Carlos Huneeus, "Malestar y desencanto en Chile, legados del autoritarismo y costo de la transición" en http://www.desarrollohumano.cl/textos/debates/Chuneus.pdf
[86] Ibid.

Kast en las reformas económicas y Jaime Guzmán, en el diseño político-institucional. El programa del equipo económico fue neoliberal no solo por su fe ciega en las leyes del mercado y su rechazo al Estado en términos solo comparables al anarquismo, sino que también lo fue en el sentido de ser un conjunto totalizante de políticas que se aplicó a la cultura (educación superior), a los grupos de interés (colegios profesionales), al urbanismo (no a la regulación del suelo urbano) y muy especialmente a la política.

Las cuentas secretas de Pinochet en el Banco Riggs descubiertas el 2004, repusieron veinte años después el tema de la corrupción y de la apropiación indebida de recursos del Estado por parte de funcionarios del régimen militar y explicitó uno de los grandes desafíos pendientes de la propia transición: el entramado económico y sus efectos aún duraderos (casos de corrupción u otras anomalías político-monetarias después de 1990) en el escenario político y en la propia Concertación.

En agosto del 2004 se creó en la Cámara de Diputados la "Comisión de Privatizaciones" (ya en 1991 se había formado una comisión investigadora que se vio obligada a interrumpir su cometido por las presiones militares), y a pesar de la escasa participación de la derecha y la falta de información registrada por la impunidad con que se actúo, la Comisión constató innumerables actos reñidos con la más mínima moral o directamente de corrupción si se habla sin eufemismos[87] y que aún se presentan a pesar del enorme avance en las leyes de probidad.[88]

Entre muchos otros, por ejemplo, este proceso se expresó en que las empresas fueron enajenadas a bajos precios (bajo valor libro) y/o devueltas sin retribución y que alcanzaron 725. La Compañía de Aceros del Pacífico (CAP), por ejemplo, se vendió en US $105,05 millones y su precio real era de US$ 811,49 millones, mientras que la venta de la industria azucarera IANSA implicó perder US$ 91,7 millones. La Corporación de Fomento Fabril (CORFO), creada en 1939, organismo del Estado encargado de promover la producción nacional donó 65 inmuebles y otros bienes (16,4 por ciento de su activo inmovilizado); el ministerio de Bienes Nacionales enajenó 15.888 inmuebles

[87] Muy aleccionador resulta el informe emitido el 2005 por la Comisión de la Cámara de Diputados designada para investigar las privatizaciones durante el régimen de Pinochet. En www.archivochile.com /Chile_actual/21_est_ide/chact_estidea0001.pdf

[88] El 2 de febrero de 2012, el Centro de Investigaciones Periodísticas (CIPER-Chile), por ejemplo, denunció irregularidades en el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Carabineros (TIC) a través de la adquisiciones con sobreprecios millonarios, proveedores privilegiados, como la comercial Mellafe y Salas, trampas al sistema de Chile Compra y contratos por trato directo que benefician a los hijos del ex general director de esa institución, Fernando Cordero. La repartición maneja un presupuesto anual de más de US$ 80 millones. La historia incluye pagos hechos por oficiales a ex funcionarios para garantizar su silencio. Ver ciperchile.cl/2012/02/02/millonarias-irregularidades-en-las-compras-de-una-unidad-clave-de-carabineros/

(10.869 fueron a manos privadas); y se liquidaron irregularmente 8 millones de hectáreas del suelo nacional. A ello se suma la descapitalización y endeudamiento de la CORFO por préstamos castigados, deudas contraídas para sanear las filiales antes de venderlas. Lo mismo ocurrió con el Banco Central para sacar a la banca y otras empresas de la crisis de 1982 y con el valor de pagaré (inferior a su valor real) para atraer inversión extranjera. Por último, están los créditos blandos, préstamos no cobrados, incentivos tributarios, franquicias y rebaja de tributos.

Lo más insólito, y reiterando el entramado del poder, es que los grupos económicos que surgieron durante las privatizaciones corresponden en gran medida a los mismos técnicos que diseñaron estas medidas y/o que fueron sus interventores como Julio Ponce Lerou, Roberto De Andraca, José Yurazeck y Carlos Alberto Délano, entre otros, los mismos "veto players" que hoy forman parte del gran capital nacional y de la dirigencia de los partidos de derecha en una natural simbiosis.[89]

Un caso simbólico de estas anomalías (la revolución neoliberal), las mismas que han puesto en duda la credibilidad sistema de partidos y, en parte explican, el malestar social que se expresa en las movilizaciones por la igualdad o simplemente en contra del modelo económico, lo constituyó la promulgación del Código de Aguas en 1981 y que sigue absolutamente vigente. Rodrigo Mundaca sostiene que este Código considera a las aguas como un bien social, pero también como un bien económico. Separa la propiedad del agua del dominio de la tierra y le transfiere la prerrogativa al Estado de que sea este el que concede los derechos de aprovechamiento de aguas a privados de forma gratuita y a perpetuidad, dando origen al mercado de las aguas (...). En ese mismo cuerpo legal se crearon dos categorías de derechos de aprovechamiento de aguas: consuntivas y no consuntivas. La diferencia entre ambas radica en la obligatoriedad de devolver o no un caudal al río. Hoy, el 90 por ciento de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas se encuentra en manos de empresas mineras y agroexportadoras, mientras que prácticamente el 100 por ciento de los derechos de aprovechamiento de aguas que se devuelven al caudal de un río se encuentra en manos de transnacionales como ENDESA de propiedad española.[90]

Hasta 1981 la dictadura controló bien las divergencias internas, casi no tuvo opositores y pareció tener éxito con su política económica manejada por un grupo de

[89] Quien hace un acertado análisis sobre esto es Patricio Silva (2006), "Los tecnócratas y las política en Chile: Pasado y presente", en *Revista de Ciencias Política*, 26(2): 184-187.
[90] En ciperchile.cl/2012/02/17/la-privatizacion-de-las-aguas-en-chile-viola-los-derechos-humanos/

economistas formados especialmente en la "Universidad de Chicago" y que tuvieron como profesores y maestros a Milton Friedman y Arnold Harberger. Este grupo de economistas fue el encargado de implementar el programa económico de la Junta Militar a partir de 1975.

Como se expresó, se buscaba la transformación radical del sistema económico nacional,[91] cambios que estaban dirigidos, en el corto plazo, a disminuir el gasto fiscal con la reducción (privatizaciones) y subsidiaridad del Estado, reorientación productiva hacia el sector primario y terciario, liberalización del mercado financiero, apertura comercial indiscriminada a través de la rebaja de aranceles y combatir la inflación. La meta última era la consecución de una economía de libre mercado en Chile con un Estado disminuido y subsidiario.[92]

Para algunos autores (P. Silva, 2006: 188) fueron estos tecnócratas los que promovieron la institucionalización del régimen al argumentar la necesidad de respetar algunos acuerdos internacionales; la necesidad de guiarse por la Constitución y de alguna forma de legalidad, y posteriormente de tener políticas de salida (transición). Los tecnócratas neoliberales partían del supuesto de que cuando las masas aceptaran definitivamente la receta neoliberal, la propiedad privada, el consumo ilimitado, etc., el régimen de Pinochet ya no sería necesario, y a esa convicción ya habían llegado a fines de los ochenta.

La Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) cumple un papel destacado en la profecía tecnocrática de "sustituir" la política por la economía. Apoyada fuertemente por la Marina, en primer lugar, tuvo la labor de reclutamiento y formación de los profesionales destinados a ocupar cargos de gobierno. Segundo, constituyó el lugar en que se prepararon algunas de las principales reformas como las privatizaciones. Tercero, sirvió para mostrar una cara humana del proyecto con las políticas de mitigación de la extrema pobreza y el rol de evaluación social de los proyectos de inversión (Hunneus, 1998: 128).

En todo caso, y más allá del importante papel de los tecnócratas, resulta interesante también destacar la coalición pragmática que desarrollaron los militares, los ex partidos y movimientos de derecha (el gremialismo por ejemplo), los tecnócratas y un

[91] Ver Juan Gabriel Valdés (1995), *Pinochet's economists: The Chicago School in Chile*. Cambridge: Cambridge University Press.

[92] Sus principales figuras eran Juan Ariztía Matte, Pablo Barahona, Álvaro Bardón, Hernán Büchi, Jorge Cauas, Carlos Clavel, Sergio de Castro, Ernesto Fontaine, Miguel Katz, Pedro Jeftanovic, Felipe Lamarca, Cristián Larroulet, Fernando Léniz, Joaquín Lavín, Carlos Massad, Rolf Lüders, Juan Carlos Méndez, José Piñera (hermano del actual Presidente), Emilio Sanfuentes y Francisco Soza.

conservadurismo católico, cuyos anclaje y relaciones se remontan profundamente en la historia nacional[93] y que termina consolidándose en la formación de un partido político a mediados de los ochenta: la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Pinochet sondeó en más de una oportunidad crear un movimiento cívico-militar,[94] una organización que le sirviera de apoyo para enfrentar los cambios y un futuro escenario de una democracia competitiva. El movimiento cívico-militar está en la declaración de Principios de Junta de Gobierno[95] y, posteriormente, se insinuó con ocasión del discurso de Chacarillas de 1977 y tras el plebiscito de 1980, donde Pinochet hace un llamado a "hombres, mujeres, niños, que a partir de mañana se inscriban en la municipalidad de su respectiva zona para formar el gran movimiento cívico-militar de Chile" (Hunneus, 1998: 140). Tal institucionalización partidaria fracasa, en lo fundamental, por dos motivos: escaso apoyo y la posibilidad de que pudiese ser visto como un partido de corte fascista.[96] La UDI, en todo caso, en el tiempo resolvió el problema sucesorio de la dictadura.

En términos de reformas económicas, algunos autores lo dividen en tres períodos a partir de un enfoque incrementalista: a) una coalición de reformas gradualistas (septiembre de 1973 a 1975 período de instalación); b) coalición de reformas radicales desde 1975 a la crisis de 1982; y c) el de una coalición pragmática con un papel protagónico de los "Chicago Boys", donde se hicieron la mayoría de las privatizaciones, desde 1985 al término de la dictadura.[97]

Un hito significativo e inesperado en el debilitamiento del régimen militar fue la severa crisis económica que estalló en 1982 a partir del impacto externo y que persistió hasta 1985, y con cuyos efectos, objetivos y subjetivos, fueron de largo plazo y, por lo mismo, alcanzaron hasta la segunda mitad del gobierno del presidente Lagos.

---

[93] Ver Mladen Yopo y Jaime Baeza (2010), "Cultura estratégica de Chile: Un anclaje híbrido que tiene identidad propia", trabajo presentado al workshop de la Universidad Internacional de la Florida-Southcom, 28 de abril de 2010.

[94] Algo parecido a la "Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista" de Francisco Franco en España y que lo dotó de una estructura burocrático-ideológica. Ver, entre otros, Cristián Cerón Torreblanca (2008), "El partido único durante el franquismo, FET de las JONS en Málaga*",* en revista *Beatica* 30: 403-414. Málaga: Universidad de Málaga.

[95] Declaración de Principios de Junta de Gobierno, 11 de marzo de 1974, p. 25.

[96] Incluso Jaime Guzmán se jugó por limitar este proceso al de un movimiento de alcance municipal, ya que lo otro insinuaba la imagen de un partido único de corte fascista. Ver *La Segunda* 13 de septiembre de 1980, p.14.

[97] Entre otros, ver Eduardo Silva (1996) "From dictatorship to democracy: The business state nexus in Chile's economic transformation, 1975-1994", en *Comparative Politics* 28(3): 299-320; y, Ricardo Ffrench-Davis (2002), "Chile, entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad", *Nueva Sociedad* 183: 70-90.

Desde 1976 el país había gozado de una cierta expansión económica pero que se revierte a partir de 1979, año en que Estados Unidos manifiesta su preocupación por desacelerar el proceso inflacionario que había caracterizado la administración del presidente Carter y decide un alza importante en las tasas de interés. Chile, que presentaba un gran endeudamiento externo (especialmente del sector financiero privado) y una política de cambio fijo, decide la devaluación del peso, lo que provoca un creciente deterioro del sistema financiero nacional. A esto se unió el desarrollo de una crisis internacional que se inicia con la declaración de México de moratoria de pagos de la deuda externa y que prácticamente paraliza el flujo de crédito hacia las economías latinoamericanas, factor que complicó aún más la situación de Chile que en ese momento mostraba un excesivo gasto que pretendía ser financiado con créditos provenientes del exterior.

La economía chilena, de esta forma, entró así en la crisis más seria experimentada desde el año 1929 (La Gran Recesión), producto de las políticas económicas aplicadas como el sobre endeudamiento externo a partir del clima de permisividad financiera internacional que prevaleció en los 70 cuando los bancos privados competían por colocar sus excedentes, la falta de regulación del sistema financiero y el déficit en la cuenta corriente (este llego a un 15 por ciento en 1981) al enviarse al exterior mayor cantidad de capital nacional que el internacional que ingresaba al país y al ser las importaciones mayores que la exportaciones, entre otros.

Pero el hecho de que todos los países latinoamericanos fueran afectados dice también que parte importante de esta crisis tuvo un origen externo. El papel de la recesión internacional a partir del 80 frenó la expansión exportadora americana al deprimir los términos de intercambio, y la aplicación de políticas monetarias restrictivas de parte de los países industrializados provocó una subida espectacular de las tasas de interés en los mercados financieros internacionales que revirtió los movimientos netos de capital hacia la región (en 1982 se redujeron a la mitad) por el elevado costo y la brevedad de plazos de los créditos, hecho que además hizo aumentar los servicios de la deuda externa.[98]

Esta crisis significó para Chile una caída en el producto (solo en el segundo semestre de 1982 de casi 15 por ciento) y un aumento de las tasas de desempleo a niveles por sobre el 25 por ciento. El éxito producido por la bonanza económica entre 1977 y 1980

[98] Un artículo aclaratorio de esta crisis, es el de Federico Millanaar "Los ochenta y la crisis de la deuda: La banca rota de Latinoamérica", en http://suite101.net/article/los-80-y-la-crisis-de-la-deuda-a1807

(baja inflación y una buen tasa de crecimiento) llegó drásticamente a su fin. La quiebra de la Compañía Refinería de Azúcar (CRAV) marcó el primer paso de una larga lista de empresas arruinadas. El gobierno tuvo que intervenir cuatro bancos y cuatro financieras.[99] El peso se devaluó y se puso término al cambio fijo del dólar. La devaluación incentivó el prepago de deudas en moneda extranjera y la acumulación de moneda extranjera en lugar de depósitos en el sistema financiero. Solo el apoyo del Banco Central permitió que en los últimos meses de 1982 las tasas de interés no alcanzaran niveles extraordinarios que, por temor a un quiebre total del sistema, habrían originado una fuga aún mayor de depósitos. También, comenzaron las licitaciones de empresas estatales (Chilectra, CAP, Compañía de Teléfonos), se rebajaron los sueldos, se intervinieron cinco bancos más. La cesantía llegó a un 30 por ciento y la inflación superó el 20 por ciento.

Las cifras de 1982 fueron lapidarias: crecimiento, en cifras rojas de menos 14 por ciento; desempleo abierto y encubierto -los programas estatales de empleo mínimo, PEM y POJH del 26 por ciento, reservas internacionales US$1.200 millones al rojo; déficit fiscal del 2,3 por ciento; aumento del salario real 0,3 por ciento (sería menos 10,9 por ciento al año siguiente); inflación del 20,07 por ciento.

A mayo de 1983 difícilmente se podía imaginar una situación financiera más crítica: las pérdidas de capital de empresas y personas eran de tal magnitud que la mayoría de los deudores solo podrían cumplir sus compromisos financieros cediendo gran parte o todos sus activos. Se responsabilizó de la crisis económica al ministro de Hacienda de la época, Rolf Lüders, quien fue reemplazado por Sergio De la Cuadra. Los generales Danús y Frez asumieron en el Ministerio de Economía y en la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN).

En 1983 se detuvo el proceso transformador a partir de la debacle económica y el florecimiento del movimiento sindical, el que condujo a una ola progresiva de protestas convocada por la Confederación de Obreros del Cobre. El gobierno de Pinochet respondió a las protestas con una violenta y masiva represión, la que incluyó el rapto y asesinato de manera brutal[100] del dirigente de los empleados públicos (ANEF), Tucapel

[99] En esta fecha, la mitad de los pasivos exigibles de la banca nacional correspondían a obligaciones con el exterior, en particular créditos financieros otorgados por la banca internacional. Hasta fines de 1981, el endeudamiento externo continuó aumentando, pero durante 1982 se fue haciendo evidente la pretensión de la banca internacional de disminuir su exposición en el país.

[100] En la descripción de la sentencia judicial del Juez Muñoz se expresa que: "uno de los sujetos, obrando sobre seguro y premeditadamente procedió a dispararle a Tucapel Jiménez en cinco oportunidades en la cabeza". El autor de los disparos fue Carlos Herrera Jiménez. Enseguida, el dirigente sindical fue

Jiménez, a partir de un plan fraguado por un grupo especial del Cuerpo de Inteligencia del Ejército en el DINE (actual Batallón de Inteligencia). Esto llevó a una agudización del clima político y los trabajadores convocaron a un paro nacional para el 11 de mayo, donde en la noche y a lo largo de todo el país se escucharon bocinazos y ruidos de cacerolas como forma de protesta.

No conforme con la represión, el régimen también comenzó a presentar requerimiento en contra de los dirigentes que convocaron a la protesta, pero la Corte Suprema señaló que las protestas no eran ilegales, marcando con ello una señal de independencia y sentando un importante antecedente para el accionar de la oposición. La más dura de las protestas se dio en los días 11 y 12 de agosto de 1983.

En agosto de 1983 nace la Alianza Democrática**,** compuesta por la DC, el socialismo renovado y sectores de la derecha democrática, los cuales buscaban una estrategia única para construir oposición. Sus principios se adherían al "Manifiesto Democrático" de marzo de 1983 (el documento fundacional de esta instancia se llamaba "Bases del Diálogo para un Gran Acuerdo Nacional"), el cual buscaba en lo principal un acuerdo nacional para generar una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución; la renuncia de Pinochet; y el establecimiento de un gobierno provisional para una breve transición. Este es el proyecto político de la futura Concertación.

Comparto plenamente la caracterización que hizo Manuel Antonio Garretón (1993: 404-405) de este período, al señalar que:

> "(...) el régimen militar inició una etapa de crisis de su dimensión transformadora, debido principalmente al fracaso de su modelo económico que se expresó, entre otras cosas, en la quiebra del sistema financiero, en el recambio del equipo encargado de la conducción económica, en una fuerte deuda externa y en un generalizado endeudamiento de vastos sectores de las capas medias. La expresión más importante de esta crisis en el interior del régimen, que muchos sectores opositores confundieron con una crisis terminal, fue el desencadenamiento de un movimiento de protestas a partir de mayo de 1983. Esto significó un renacimiento del movimiento de masas y obligó al régimen a una incipiente apertura".

---

degollado. Cuando lo encontraron, su cuerpo presentaba tres heridas cortopunzantes en la región cervical. Antes de abandonar el lugar, los asesinos "sustrajeron un taxímetro, una linterna, un reloj pulsera, una peineta y documentos personales de la víctima" para sugerir una asalto con fines de robo". Herrera Jiménez, autor confeso de este crimen, dijo que recibió la orden de eliminar al sindicalista de parte de sus jefes en el Cuerpo de Inteligencia del Ejército, el brigadier en retiro Víctor Pinto Pérez y el ex comandante del organismo teniente coronel en retiro Francisco Ferrera Lima. Además sostuvo que el eje máximo de la Dirección de Inteligencia del Ejército en 1982, Ramsés Álvarez Sgolia, fue señalado por Pinto Pérez como una persona que estaba enterada del plan.

En conjunto con la represión, se inicia un segundo período en el ámbito económico. Este fue más inclusivo de la variedad de intereses de los sectores privados, incluyendo la apertura de los mercados y a los organismos financieros multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

En todo caso, agosto de ese año había comenzado sombrío para el régimen de Pinochet. Más allá de la efervescencia social, resaltaron una serie de rencillas en las instancias de decisión del gobierno a partir de las diferencias que se habían instalado (especialmente en el equipo económico), divergencias que produjeron la urgente necesidad de un reordenamiento del gabinete ministerial. A ello se dedicó el general Sinclair, Secretario General de la Presidencia, y nexo asesor entre Pinochet y los generales del Ejército.

El objetivo de Sinclair era elaborar un plan político que sacara al régimen del arrinconamiento del que estaba siendo objeto con una movilización social cada día más incontrolable, a lo que se sumaba la falta de iniciativa del mismo Ejecutivo. Se estaban perdiendo dos variables básicas para la gestión de cualquier gobierno que pretendiera lograr el controvertido objetivo de la gobernabilidad: presencia y control. Para enfrentar esta realidad, Sinclair formó un equipo con el viejo político de derecha Sergio Onofre Jarpa (en ese momento era embajador de Chile en Argentina), el ex militante demócrata cristiano William Thayer y los coroneles Guillermo Garín y Jorge Ballerino. El objetivo era tener una propuesta antes del 11 de agosto, día de la IV Jornada de Protesta Nacional. El plan estuvo listo el 9 de Agosto, y el día 10 juraba el nuevo gabinete, encabezado por Jarpa como ministro del Interior. Su objetivo era conseguir un acuerdo con el PDC, que excluyera cualquier participación de los socialistas y avanzar hacia una democratización regulada, a la vez de neutralizar la protesta social.

Muchos personas hablaron de un proceso de "apertura del régimen militar" porque se incorporaron civiles al gabinete pinochetista y se hablaba de "respuestas" a la creciente protesta antidictatorial de carácter nacional y al vacío de poder que se empezaba a generar. El signo más palpable de ello había sido la designación de Sergio Onofre Jarpa, ex presidente y ex parlamentario del Partido Nacional, como ministro del Interior. Pero la verdad es que era un "juego de piernas" (solo movimiento para dar apariencia de eficacia), frase del box que el propio Augusto Pinochet le gustaba usar, en un marco de debilitación-interpelación relativa.

2.6 La reorganización de la derecha política para enfrentar el plebiscito

Ese año, en esta creencia, un grupo de ex legisladores conservadores creó el Comité de Acción Cívica y otro grupo de connotadas figuras de la burguesía nacional quiso rearticular el Partido Nacional. Pero en la línea de la reorganización y refundación de la derecha política, los pasos decisivos los dieron, de un lado, los gremialistas-pinochetistas que dieron origen al Movimiento Unión Demócrata Independiente, encabezado por el ideólogo de la dictadura, Jaime Guzmán.

La UDI, desde su origen, reunió a cuadros del movimiento gremial conservador surgido a fines de los sesenta para combatir la reforma universitaria y al ideario revolucionario que se había instalado, y a cuadros del pinochetismo que provenían de las "organizaciones civiles" de la dictadura, del aparato estatal, de las FF.AA., del grupo de "alcaldes designados", jefes regionales y de círculos ideológicos autoritarios (fusionó el gremialismo con el pinochetismo).

Este partido asumió cinco premisas que aún mantienen. Estas son las de fortalecer las "sociedades intermedias" (gremios, clubes, asociaciones, federaciones, juntas de vecinos, grupos académicos y religiosos); promover la "subsidiaridad" desde un Estado pequeño; fortalecer la "libertad individual" por sobre ideas colectivas y comunitarias; promover la familia como "base de la sociedad" y los valores cristianos a ultranza. Junto a eso, se propusieron consolidar el proyecto neoliberal, preservar la institucionalidad autoritaria de 1980, construir una gran fuerza política, potenciarse electoralmente e instalarse en la base social (la UDI Popular) con el firme propósito de terminar con la división de clases.

La UDI siempre inspiró un halo místico interno, transmitido con dosis proféticas, donde su ultimado ex senador Jaime Guzmán con su fuerte religiosidad pasó a tener un rol relevante y "santificado", expresado en aquella confesión de Pablo Longueira, de que el ultimado senador Guzmán le había hablado desde el cielo. A esto se sumó la figura de Simón Yévenes, dirigente poblacional muerto por acción de un grupo armado, como símbolo del trabajo social de la UDI. Esta concepción de mesianismo místico fue mixturada tempranamente con su vertiente ideológica autoritaria. Jaime Guzmán sentenció que en la fundación de la organización están:

> "(…) quienes nos enorgullecemos de haber impulsado el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973" y que el propósito fue responder "al anhelo de ofrecer un cauce de servicio público, un movimiento que luche por una sociedad integralmente

> libre y que interprete a las grandes mayorías silenciosas –tradicionalmente ajenas y reacias al quehacer partidista- sobre la base de un nuevo estilo político, moderno, ágil, eficiente y serio".[101]

Desde fines de los ochenta, la UDI, a quienes varios atribuyen la asimilación de normas leninistas, muy eficaces en la concepción partidaria, estableció prioridades organizativas que serían claves para sus logros electorales futuros (se constituyó en el partido más votado de Chile). Creó el Departamento Poblacional, destinado a desarrollar toda la labor social y territorial en ámbitos populares y que han sido dirigidos por figuras emblemáticas como Jaime Guzmán, Pablo Longueira, Luis Cordero y Cristián Leay. En esa área trabajaron también desde muy joven varios de los actuales diputados y alcaldes de ese partido.

También creó la Fundación Jaime Guzmán, que actúa como escuela de cuadros permanente. Impuso una férrea disciplina política y orgánica interna dominada por los llamados "coroneles",[102] que durante años la mantuvo lejana de quiebres, tendencias y fisuras, mostrando una colectividad monolítica y ordenada (eficiencia y disciplina militante). A través de ello, pudo constituirse en el partido más votado de Chile dejando atrás a RN y más atrás a la DC. En elección de senadores, en 1989 la UDI obtuvo 4,85 por ciento y el 2009 llegó al 19,66, es decir subió casi 15 puntos. En la de diputados, pasó de 9,32 por ciento en 1989 al 21 el 2009, es decir, 11 puntos más. En las municipales, considerando los mismos años, pasó de 10,19 por ciento al 13,24.

A los generales y coroneles de la UDI, hoy se les unen dos grupos más. La generación de los noventas que "andan en busca de su destino" (como dice uno de ellos) e intentan construir un marco conceptual que los reúna e identifique y cuyas caras hoy vemos en los municipios, en la Cámara de Diputados y en el gobierno de Piñera: Ernesto Silva Méndez, María José Hoffmann, Felipe Ward, Jaime Bellolio, Ena von Baer, Jacqueline van Rysselberghe, Francisco Moreno, Juan Antonio Coloma (hijo) y

---

[101] *Op cit.*, www.reporte.cl/principal/index.php?option=com_content&view=article&id=163:un-dibujo-de-la-derecha-chilena-&catid=34:lo-nacional&Itemid=53

[102] El tronco fundacional de la UDI tiene dos ramas: la de los amigos y contemporáneos de Jaime Guzmán (artífices del gremialismo); y la de quienes fueron reclutados por éstos. Es decir, los "generales-ideólogos" y los que más tarde se perpetuarían como "los coroneles e hicieron la pega". Los que fueron pares de Guzmán y estuvieron en el origen del gremialismo universitario fueron Jovino Novoa, Raúl Lecaros, Hernán Larraín, Juan Eduardo Ibáñez, Ernesto Illanes, Máximo Silva, Manuel Bezanilla, Luis Monge, Rodrigo Mujica, Roberto García, Willy Arthur y Sergio Gutiérrez. Entre los que fueron "reclutados" por el grupo anterior, pero especialmente por Guzmán, estaban, entre otros, Coloma, Longueira, Andrés Chadwick (ellos pasarían a ser "los coroneles"), Luis Cordero, Jaime Orpis, Domingo Arteaga, Gabriel Villarroel, Carlos Villarroel, Patricio Melero, Iván Moreira, Gonzalo Rojas, José Yuraszeck, Ernesto Silva, Miguel Kast y Cristián Larroulet. Revista *Qué Pasa* Nº 2048 – *Debates*, "La nueva UDI (o la última batalla de los coroneles)", 9 de julio de 2010.

Cristóbal Leturia. A ellos se suman los que han terminado militando ahí por el oficio de la política, porque tanto ellos como el partido vieron en su ingreso una oportunidad recíproca. Aquí hay alcaldes y parlamentarios, como Gustavo Hasbún, Francisco de la Maza, Cristián Labbé, Pablo Zalaquett, Mónica Zalaquett, Andrea Molina y Virginia Reginato, entre otros. [103]

El otro gran partido de la de derecha es Renovación Nacional (RN). Antiguos dirigentes de la derecha política que combatieron al gobierno de la Unidad Popular y que querían representar una fuerza de recambio político y generacional (se presentarían como "derecha liberal"), crearon el Movimiento Unión Nacional (MUN) liderado por el ex líder de la Juventud Nacional, Andrés Allamand, y el Frente Nacional del Trabajo conducido por el propio Onofre Jarpa.

Estas últimas fuerzas, junto a otros grupos y segmentos derechistas y pinochetistas, crearon a fines de los ochenta la alianza Renovación Nacional. Ella era la expresión sublime del referente político y electoral de la derecha chilena que le otorgaba la base necesaria a la dictadura y a los sectores dominantes para posicionar su proyecto político en el nuevo período que se abriría en el país. Esas colectividades constituían la herramienta y vehículo de la derecha política, de los militares, de los grupos económico-financieros, de los propietarios de medios de comunicación, de sectores ultraconservadores de la Iglesia Católica, para entrar a la fase transicional en que se estaba ingresando y ser un actor legitimado en la democracia formal que se inauguraría más tarde con el plebiscito de 1988.

RN tiene una matriz en lo que fueran el Partido Nacional y expresiones del conservadurismo que alcanzaron su mayor posicionamiento durante el período de la UP. También destaca en su origen la participación de connotados funcionarios de la dictadura como Sergio Onofre Jarpa, Alberto Cardemil, María Angélica Cristi y Miguel Otero. Varios financistas y empresarios que hicieron o consolidaron sus fortunas durante la dictadura como el mismo presidente Sebastián Piñera. En sus inicios también ingresó un grupo de jóvenes académicos que si bien compartían la obra de la dictadura, estaban por introducir modificaciones liberales a la institucionalidad dominante y ya miraban aquel concepto de construcción de una "derecha moderna" (crearon el Movimiento Unidad Nacional) más allá de la defensa del proyecto neoliberal, reivindicar el golpe de Estado y la Constitución de 1980.

[103] *Ibid.*

En los noventas se agudizaron las contradicciones entre el sector más duro, identificado plenamente con la dictadura y sus logros, y otro sector liberal que quería presentarse doctrinariamente como centroderecha y/o "derecha moderna". El primer gran choque se produjo a fines de los noventa en un Consejo Nacional en Temuco, donde los más conservadores, liderados por Cardemil, Onofre Jarpa y Otero afianzaron sus posiciones. A ello se sumaron derrotas políticas y electorales de liberales como Andrés Allamand y Sebastián Piñera, los que estuvieron un par de años replegados.

Por cierto, en varios de esos golpes se vio las manos de la UDI y segmentos de la derecha económica. Las posturas de los liberales (agrupados en la llamada Patrulla Juvenil) y las asonadas de los ultraderechistas llevaron a que incluso desde la Concertación se comenzara a hablar de una derecha democrática o liberal en Chile.

Sin embargo, los avances democratizadores, las nuevas realidades en el país, el natural desgaste generacional y el avance de la UDI en el plano electoral, junto a una consolidación del trabajo interno de los liberales, terminaron desplazando gradualmente a los más duros. En ello también incidió favorablemente que los propios personeros liberales como Andrés Allamand y Alberto Espina endurecieron sus posturas, retomaron el discurso del libre mercado e institucional/autoritario con un tono más confrontacional con la Concertación.

La Declaración de Principios de RN, en todo caso, es la que dibuja mejor las posturas y características de esta colectividad. Expresa que:

> "Existe un orden moral objetivo, fundamento de la civilización cristiana occidental, al cual debe ajustarse la organización de la sociedad". Agrega que los derechos ciudadanos deben ser acompañados con normas excepcionales que permitan cautelar el orden social. Reconoce que "las FF.AA. y de Orden simbolizan la unidad de Chile" y que tienen la misión de garantizar "la identidad histórico-cultural de la Patria y han de garantizar el orden institucional", entre otros. RN también promueve a la familia como núcleo de la sociedad defendido principalmente por el rol de las mujeres; la "subsidiaridad" del Estado y el libre mercado, el desarrollo de los "estamentos intermedios" de la sociedad; la institucionalidad surgida de la Constitución de 1980; libertad individual por encima del concepto de masas, estableciendo conceptos como que "la empresa privada es el pilar básico e irremplazable en una sociedad libre".[104]

RN buscaba (y busca) asentar su base social y electoral consolidándose en sectores propios y atrayendo a segmentos de la población que se identifican con el centro

[104] *Op cit.*, www.reporte.cl/principal/index.php?option=com_content&view=article&id=163:un-dibujo-de-la-derecha-chilena-&catid=34:lo-nacional&Itemid=53

político y particularmente con el área de influencia de la DC. Si bien en las elecciones senatoriales bajaron 8 puntos entre 1989 y 2009, y en las de diputados y municipales se mantienen con oscilación de apenas un punto, hoy cuentan con uno de los suyos como Presidente de la Nación.

Jarpa, como ministro del Interior, planteó la necesidad de acortar los plazos de los artículos transitorios de la Constitución de 1980 y promulgar leyes que condujeran a una democratización controlada (posibilidad de un Congreso, una regulada libertad de información, permitir la actividad política incluso de los partidos de izquierda, el retorno progresivo de los exiliados, etc.). Con ello, el ex líder del Partido Nacional pretendía menguar y controlar los mayores focos de conflictividad, a la vez de permitir que la derecha política condujera el proceso hacia la normalización político-institucional del país. Sin embargo, aquella posibilidad se desvirtuaría por un error político: Jarpa juró como ministro del Interior un día antes de una gran jornada de protesta que movilizó a una parte importante de la estructura militar para ocupar Santiago (cerca de 18 mil hombres). El debut de Jarpa se dio con muertos, heridos y detenidos, resultados que terminaron echando por tierra su "afán aperturista" y de paso su credibilidad.

Con tan notable tropiezo, Jarpa tuvo que iniciar sus acciones con tropiezos y métodos propios de su viejo estilo político. Tenía claro que con Gabriel Valdés[105] liderando el PDC, le sería imposible recomponer las relaciones que hasta 1973 había tenido con ese partido en su lucha en contra del gobierno del presidente Allende, por lo cual debería buscar minuciosamente a sus interlocutores. Sabía que hombres como Patricio Aylwin, Juan Hamilton o Andrés Zaldívar no jugarían ningún papel contrario a la directiva oficial. De allí que el Proyecto de Desarrollo Nacional (PRODEN) sería el objetivo para su primera ofensiva: intuía que la personalidad de Jorge Lavanderos podía ser abordable para efectuar una provocación para medir el poder de Valdés en el PDC.

Al poco tiempo de haber asumido como ministro del Interior, se efectuaba un encuentro entre el Jarpa y Lavanderos en la casa del ex diputado DC Luis Pareto. Los tres tenían algo en común: habían militado en el Partido Agrario Laborista que apoyó a Carlos Ibáñez del Campo en su presidencia constitucional (1952-1958). Jarpa estimuló a Lavanderos a asumir un rol protagónico, y este le entregó algunas proposiciones para

[105] Entre otros, ex Canciller del Presidente Frei Montalva, Director del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ex Presidente del Senado y ferviente partidario de un acuerdo de la DC con la izquierda para generar una transición a la democracia en Chile ya en 1975 y crítico de la línea política seguida por el entonces presidente del partido, Patricio Aylwin. Esto último le costó la amenaza de un inminente atentado organizado por la DINA y la protección de FBI. Valdés fue una pieza vital en la transición.

democratizar el proceso político, que el ministro de Pinochet prometió estudiar. Sin embargo, al no contar Lavandero con el beneplácito de su partido para este diálogo, la dirección de la Democracia Cristiana resolvió quitarle el piso y lo llamó a la disciplina, hecho que contó con el apoyo de todos los dirigentes históricos del sector más conservador de la DC. Lavandero quedó solo y el PRODEN se reduciría a un grupo de personas sin ningún apoyo partidario y, por lo mismo, carente de legitimidad y representatividad.

A esta altura se notaba que los movimientos de Pinochet eran solo una distracción de estilo militar. Las maniobras de Jarpa no dieron frutos, porque indirectamente pedían la salida de Pinochet y este último desautorizaba al mismo tiempo al ministro.

Consolidado en el PDC, Valdés recibiría un almuerzo de homenaje en el Círculo Español, pero cuyo verdadero objetivo era anunciar un acuerdo político entre los demócratacristianos, los socialistas, los radicales, los socialdemócratas y los republicanos, que apuntaba a una alianza de partidos que ofreciera al país una salida democrática a partir del Manifiesto Democrático. Este hecho marca un notable cambio en las perspectivas políticas e ideológicas de la Democracia Cristiana, al transitar desde una política del "camino propio" (Frei Montalva en 1964 – Tomic en 1970) a una política de alianzas estables con parte importante de la izquierda, con lo cual se sientan las bases para un futuro gobierno de coalición de amplio espectro concretizado en la Concertación. Con ello, además, se explicitó el rompimiento del presente pero dormido sentido de los tres tercios que había dominado la política chilena en la segunda mitad del siglo XX.

El 22 de agosto se daba a conocer formalmente el acta de constitución de la Alianza Democrática, donde se planteaban tres requisitos básicos para restablecer la democracia: la salida de Pinochet del poder, un gobierno provisional y una asamblea constituyente para generar una nueva Constitución Política.[106] En los diarios de Santiago, en un hecho considerado inusitado en los diez años de dictadura y una clara debilitación del régimen también, se daba a conocer extensamente el Acta de la Alianza Democrática (AD). Se advertía con esto, con asombro y expectación, de una "ruptura" de las reglas por parte de la prensa (las noticias políticas reaparecían con notoriedad en todos los medios), incluso los medios de derecha que fueron muy colaboracionista con la dictadura como

[106] Ver Alan Angell (1993), *Chile de Alessandri a Pinochet. En busca de la utopía*. Santiago: Editorial Andrés Bello-CERC.

la cadena *El Mercurio* y fuerte opositor (veto player) a los posteriores gobiernos de la Concertación.[107]

Edgardo Boeninger (1997: 309-312) reflexionando al respecto, constata que:

> "El Acuerdo Nacional fue el primer paso en el tránsito de la confrontación al consenso que marcó el proceso político chileno, un episodio precursor de la transición chilena a la democracia (...) La lección de esta experiencia es que mientras las Fuerzas Armadas mantuvieran su solidez y cohesión internas y en tanto no se produjera una avasalladora presión social, la transición sólo podía darse en el marco del esquema oficial. Estas reflexiones fueron surgiendo en los círculos opositores en el curso del año 1986".

En esos momentos ya se hablaba de posibilidades reales de un encuentro Jarpa-oposición y representar el histórico sentido de consenso que ha permeado la mayor parte de la historia nacional, lo que, lógicamente, provocó una serie de discusiones en el seno del recién formado Consejo de la Alianza Democrática, pero se aceptó la idea.

El 25 de agosto, en esta prédica, a la casa del Arzobispo Fresno llegaban Gabriel Valdés, Luis Bossay (socialdemócrata), Hugo Zepeda (derecha republicana), Enrique Silva Cimma (radical) y Ramón Silva Ulloa (en ese momento ya al margen del PS). Valdés le trató de entregar a Jarpa un documento con las proposiciones de la oposición (Acuerdo Nacional) y que incluían el fin del régimen, una asamblea constituyente y un gobierno provisional. Jarpa no recibió el documento porque, desde su punto de vista, no constituían "bases para el diálogo" el exigir, parafraseando en el ámbito del ajedrez, darle jaque mate al rey (Pinochet).

Jaime Guzmán, ya el año 1979 durante la transición española, escribía del gran error (y peligro) de Franco de no ver que "en España se implantaría una democracia que su propia obra estaba engendrando". De allí dice que Pinochet debía ser el conductor del proceso político y no podía limitarse su rol a "sentar las bases de una democracia estable, sino (que) además en asumir realista y oportunamente las responsabilidades de impulsar y guiar al país hacia el pleno funcionamiento de la democracia. Separar la transición de la institucionalización definitiva sería privar a aquella de su mayor fruto y sentido" (Hunneus, 1998: 143).

[107] En relación a esto último, además de los trabajos de académicos como Claudio Durán o Claudia Lagos, de cientos de denuncias en organismos internacionales o la prensa mundial, destaca el estreno en mayo del 2009 de una investigación de tres años que dio como fruto un documental llamado "El Diario de Agustín", donde se registra cómo se efectuaron montajes comunicacionales en la dictadura militar para esconder crímenes y actos de violaciones a los Derechos Humanos de los diarios pertenecientes a Agustín Edwards Eastman (*El Mercurio, Las Últimas Noticias, La Segunda* y una cadena de 20 diarios regionales) o en otros como *La Tercera o La Nación* de la época, por citar algunos.

A pesar de que se anunciaba un nuevo diálogo, Jarpa anunciaba la renovación del Estado de Emergencia, estado de excepción que daba marco legal y permitía, entre otros, la represión. También se reglamentaron las reuniones públicas (incluso las concentraciones políticas) y se señaló que el artículo 24 Transitorio de la Constitución Política no sería utilizado aun cuando no se derogaría. Por último, el gobierno de Pinochet autorizó el ingreso al país de varios prominentes exiliados como una forma de acercarse especialmente del PDC (y generar diferencias con el resto de la oposición), entre los cuales estaba el presidente de la Democracia Cristiana Internacional, Andrés Zaldívar, el ex presidente del PDC, Renán Fuentealba, y el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Jaime Castillo Velasco.

Claramente se entendía en esos momentos que la apertura sería un proceso de fuerza, desde el punto de vista democrático no militar, pero oposición de fuerzas al fin y que llegaría a su clímax en la disyuntiva dictadura-democracia planteada en la vía institucional del plebiscito de 1988.

La sensación de apertura que Jarpa quería dar para llevar adelante su gestión sufriría un segundo gran escollo. Un grupo paramilitar del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), en la mañana del 30 de agosto, baleaba al Intendente de Santiago, general Carol Urzúa, provocándole la muerte.[108] Este hecho, manejado hábilmente por Pinochet, le quitó fuerza al Plan Jarpa entre los propios generales que lo habían impulsado a través del general Sinclair.

A través de una serie de acciones, Jarpa siguió jugando a la división opositora (buscó una nueva interlocución con Jorge Lavandero y el PRODEN). Ante ello, la reacción de la directiva de Valdés fue imponer sus términos, prometiendo medidas disciplinarias, planteamiento que contó con el apoyo de toda la Alianza Democrática y una semana después de esa controversia, Valdés inaugura las presidencias rotativas de la Alianza Democrática, para que pudiera llamar a la quinta jornada nacional de protesta para el 8 de septiembre, cinco días antes en que el régimen celebrara los 10 años en el poder. En 1985, Jarpa fue sustituido por Ricardo García y Escobar por Hernán Büchi, pero dejando un fuerte sabor a despertar político.

Concordando con Justo Tovar (1999:12-13), una apreciación de los sub escenario del momento permitía observar las dificultades de la negociación por las que atravesaba el escenario principal (diálogo Jarpa-Alianza Democrática), al estar tironeado por la

[108] Ver *El País*, 31 de agosto de 1983.

izquierda por el Movimiento Democrático Popular (MDP)[109] y por la derecha por la Unión Demócrata Independiente y Pinochet. Además, hay que agregar que los esfuerzos de Jarpa y la AD no empezaron con una base común, obstáculo que nunca se superó más allá de un tibio acuerdo sobre la formación de una comisión paritaria que estudiara y formulara leyes políticas. La posibilidad de la continuidad del diálogo implicaba que las partes cediesen sustantivamente sus posiciones, lo que resultaba difícil debido al anclaje más radical de los sub-escenarios colaterales.

En el ámbito económico, después de dos años de fuerte incertidumbre el país pudo crecer a partir de un reforzamiento de la liberalización micro-económica, pero esta vez complementado con un estricto manejo macro-económico, el que apuntó principalmente a una regulación financiera más exhaustiva, al control de los flujos de capitales de corto plazo y, finalmente, a la promoción sostenida de las exportaciones por la vía de un régimen de "*crawling peg*"[110] en el tipo de cambio (un tipo de cambio inicial fijo que se ajusta periódicamente de acuerdo a una fórmula predeterminada). En el aspecto macro, se le da particular énfasis a evitar que la demanda agregada creciera por arriba de niveles sustentables (esto ha sido consolidado también con la autonomía otorgada al Banco Central desde 1990).

A pesar de ello, la situación socio-económica no mejoró sustancialmente para la población en general. La cesantía siguió alta hasta el final del gobierno militar, el empleo seguía siendo muy precario como se constató con los programas especiales de empleos PEM (Programa de Empleo Mínimo) y POJ (Programa de Obras para Jefes de Hogar) creados por ODEPLAN entre 1981 y 1983 para paliar la cesantía y los sueldos bajos.

En el caso de la educación y siguiendo la ideología de la subsidiariedad del Estado, los colegios fiscales fueron traspasados a las municipalidades y a sostenedores privados, iniciándose con ello una fuerte desigualdad en cuanto a la calidad de la enseñanza (realidad que dura hasta hoy). La profesión docente pasó a ser una de las laboralmente más inseguras, con mucha rotativa y malos salarios, lo cual ha redundado en una carrera poco atractiva para los jóvenes y que ha hecho que baje la cantidad y calidad de los

[109] El MDP formado por el PC, el MIR, la Izquierda Cristiana y el PS Almeyda, fue el contrapeso en el sub escenario desde la postura más radicalizada de la izquierda a la Alianza Democrática.

[110] Expresión inglesa que se traduce usualmente al castellano como "mini devaluaciones sucesivas". Designa una política cambiaria caracterizada por ajustes sucesivos de la moneda local que descarta las devaluaciones o reevaluaciones bruscas como medio de favorecer la adaptación de la economía nacional ante los necesarios ajustes cambiarios. El crawling peg procede entonces por pasos sucesivos, más o menos planificados previamente, que acercan gradualmente la paridad de la moneda nacional a los valores deseados.

postulantes a esa profesión en las universidades. Los colegios se transformaron en negocios donde se relaja la calidad y disciplina académica y se promueven alumnos de curso sin cumplir con estándares mínimos con el propósito de embellecer estadísticas (y de paso obtener los subsidios del Estado).

El caso de las universidades no fue muy distinto con la llamada Ley de Autofinanciamiento de las Universidades, donde se tendió a desmantelar la educación superior pública a través de recortes en la inversión a favor de una educación superior privada de escasa calidad, sin estándares ni pluralismo. Esto, al final, explica hoy las masivas movilizaciones estudiantiles con apoyo mayoritario de la ciudadanía en pro de un cambio radical del paradigma y del sistema educacional.[111]

La salud pública no andaba mucho mejor, sobre todo cuando se crea el sistema de Isapre en 1981. Todo comenzó en el año 1979, cuando se decide disminuir el financiamiento al Servicio Nacional de Salud (SNS), se reestructuró el sector estatal, se reorganizó el Ministerio de Salud y se creó el Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS) con los 27 servicios de salud que funcionan actualmente. El 19 de marzo de 1981, con el Decreto con Fuerza de Ley N° 3, se crean las Instituciones de Salud Previsional, ISAPRES y se faculta a los trabajadores y personas en general, a depositar en estas sus cotizaciones obligatorias. "En unas cuantas líneas se estipuló que el 7 por ciento de la cotización de la salud se podía destinar a un sistema privado", recuerda el director ejecutivo de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes. Con ello, por cierto, se acaba con el concepto de solidaridad en la salud.[112]

Para el ministro de Salud del gobierno de Patricio Aylwin, Jorge Jiménez, esta fue una "reforma sin plata, sin incentivos técnicos. La apuesta del gobierno militar fue reducir al máximo el sistema público para dar paso al sistema privado (...)". El senador DC Mariano Ruiz Esquide, por su lado, destaca que "La gran herencia de la dictadura de Pinochet es que hubo unos pequeños grupos que se enriquecieron a costa de los usuarios. El sistema privado funcionalizó a los médicos, convirtiéndolos en un bien transable. Tengo un documento firmado por especialistas y facultativos de derecha de

[111] Ricardo López Erazo en su artículo "El sistema de acreditación de la educación superior en Chile" hace un buen análisis de esta realidad. En http://cuadernosdeeducacion.wordpress.com/tag/augusto-pinochet-ugarte/

[112] Ver Ana María Arteaga, "La lógica brutal de la privatización", en *Control Ciudadano /100* en http://rrojasdatabank.info/dbinfo2/chile2003_esp.pdf

esa época que se opusieron a la creación de las Isapres, porque sabían que provocarían una desigualdad sanitaria que persiste hasta hoy".[113]

Esa situación desmedrada e inseguritante de los chilenos en el ámbito económico-social dio ánimo para que los opositores organizaran masivas manifestaciones en contra la dictadura, las que se hacían mensualmente de marzo a noviembre. En este contexto desafiante, Pinochet se vio obligado a hacer algunas concesiones como permitir el regreso de más exiliados y la aparición de algunas revistas de oposición (léase *APSI, Análisis, Cauce, Fortín Mapocho, la Bicicleta*, etc.). Aquí comienza el largo y difícil camino hacia la "transición hacia la democracia", proceso que fue apoyado esta vez por la mayor parte de la Iglesia Católica (actor conservador muy ligador al poder económico y militar), cuyo principal vocero, el cardenal Raúl Silva Henríquez, criticó abiertamente los excesos del régimen desde sus inicios. [114]

Esta situación de cambios profundos, y teniendo presente la necesidad de la sociedad de evitar una nueva polarización, mediatizó también al sector maximalista de la oposición que estaba integrado por el PC y la izquierda cristiana, a los que cabe agregar una oposición netamente revolucionaria conformada por desprendimientos del MIR (partido antisistema) y del propio PC, que llamarían a oponerse al régimen utilizando todas las formas de lucha, incluyendo la violencia.

A excepción del secretario de Estado Norteamericano, Henry Kissinger, el régimen militar chileno fue recibido desde un comienzo con estupor, rabia y rechazo a partir de una imagen internacional idealizada del presidente Allende (primer gobierno socialista que gana por votos y plantea un cambio a la chilena con "empanadas y vino tinto"), su elevación al estatus de mártir tras su muerte y por la violencia mostrada durante el golpe de Estado con los muertos, perseguidos y exiliados. Esto implicó un temprano y muy severo[115] aislamiento político internacional del régimen que se inauguraba y que, entre

[113] Ver "Pinochet: crímenes y mitos", 1ª parte, *La Nación*, 17 de diciembre de 2006, p. 20.

[114] El cardenal Raúl Silva Henríquez, sin poder evitar el golpe a pesar de los esfuerzos que hizo por promover un diálogo del presidente Allende con la oposición, se irguió al poco tiempo como uno de los principales defensores de los DD:HH. Producto de su ecumenismo, fundó con la ayuda de otras iglesias cristianas el Comité Pro Paz, con el fin de resguardar a los perseguidos. Después de fuertes presiones por parte del régimen de Pinochet, dispuso el cierre de aquel organismo a fines de 1975. En respuesta a esta situación, creó la Vicaría de la Solidaridad, principal organismo defensor de los DD.HH. durante este período. Aunque su más destacada faceta pública aparece en este ámbito, cabe destacar también su fuerte influencia en la doctrina de la Iglesia de Chile. Creó la Academia de Humanismo Cristiano, la Vicaría de la Pastoral Obrera, y reorganizó la administración del arzobispado. Entre muchos libros, ver *La mirada del Cardenal Raúl Silva Henríquez* de los académicos P. José Lino Yánez, Freddy Timmermann y Eduardo Rojas (2009), edición especial del boletín *Cosas Buenas* de la Pastoral Universitaria.

[115] Ver Heraldo Muñoz (1986), *Las relaciones exteriores del gobierno militar chileno*. Santiago: PROSPEL-CERC/Ediciones del Ornitorrinco.

otros, impediría a Pinochet viajar oficialmente al extranjero. Esto último quedó demostrado tras el bochorno del "Filipinazo", en que por presiones del presidente de Estados Unidos el gobierno de Filipinas, durante Ferdinand Marcos, suspendió una visita oficial cuando Pinochet ya se encontraba en pleno vuelo.

Con Estados Unidos las relaciones se empeoraron gravemente tras el atentado terrorista fomentado por la dictadura al ex Canciller de Allende, Orlando Letelier, en Washington, donde también murió su secretaria Ronnie Moffit. Washington respondió en forma mesurada, considerada la magnitud de la afrenta, con la Enmienda Kennedy,[116] que entró en vigor en 1976, y vedaba toda venta de armas a Chile hasta que se cumpliesen tres condiciones: un progreso significativo en el respeto de los derechos humanos, que la venta fuese del interés nacional de Estados Unidos y que las autoridades chilenas no ayudasen o encubriesen al terrorismo internacional, y tomasen todas las medidas apropiadas para someter ante la justicia a los acusados de los asesinatos. La Enmienda Kennedy significó, entre muchas otras cosas, que el otro modelo de aviones de combate, la quincena de F-5 Tiger II de la empresa norteamericana Northrop, también se quedara sin repuestos en el mercado formal,[117] debilitando de manera significativa las capacidades nacionales en materia de defensa.

El aislamiento y la debilitación del país se daba en medio de una situación de amenaza para Chile de parte de los países limítrofes. Primero con las posturas amenazantes de Perú en 1974-1975 y que perdurarán en el tiempo, y luego especialmente por Argentina, con la controversia por las islas del canal de Beagle. Este conflicto se centró en la disputa por la posesión de las islas e islotes ubicados en el llamado "martillo".[118] En 1971 ambos países habían acordado un Compromiso de Arbitraje y someter la soberanía de las islas a la sentencia de una corte arbitral que debía dar a conocer su decisión al gobierno del Reino Unido. La corte arbitral dictó una sentencia, conocida como Laudo Arbitral de 1977, que otorgaba aguas navegables en el

[116] La prohibición se mantuvo a lo largo de la dictadura y solo fue levantada con el restablecimiento de la democracia y la condena de Manuel Contreras por su responsabilidad en los hechos.
[117] La indignación pública internacional por el bombardeo a La Moneda y la violación a los DD.HH., ya había llevado a los sindicatos de la planta Rolls Royce de East Kilbride, en Escocia, a boicotear la entrega de los motores Avon sometidos a mantenimiento así como de repuestos. Luego el gobierno británico respaldó la medida. De esta forma, ya en 1974, la FACH perdió el abastecimiento regular para su principal avión de combate. La continuación de la violación de los DD.HH. llevó a Francia, Holanda, Austria, Suecia y Alemania a decretar embargos similares. En Raúl Sohr, "La herencia del régimen militar", suplemento especial de *La Nación*, 17 de diciembre de 2006, pp. 20-24.
[118] Aquí se hallan las islas Picton, Lennox y Nueva, Gratil, Augusto, Snipe, Becasses, Gable e islotes adyacentes.

canal Beagle a ambos países y la mayor parte de las islas y de los derechos oceánicos a Chile.

El régimen militar argentino rechazó el fallo, considerando «insanablemente nula» la decisión arbitral y extendió el conflicto hasta el cabo de Hornos y amenazó con la guerra, conflicto que llegó a su punto culminante el 22 de diciembre cuando las FF.AA. argentinas se dispusieron a ocupar las islas en disputa. Durante este período las FF.AA. chilenas plantearon la hipótesis de conflicto con todos los vecinos (H3).

El gobierno militar argentino tras la presión internacional, particularmente de Estados Unidos que no quería una distracción en la lucha contra el comunismo en la región y de Brasil que veía la acción argentina como una amenaza en contra de un país amigo[119] y propia, y la resolución de la disputa interna entre blandos y duros a favor de los primeros, aceptó la mediación de la Santa Sede (1979-1980), cuya resolución (Tratado de Paz y Amistad de 1984) se firma en el gobierno democrático de Alfonsín tras un plebiscito donde el apoyo a este concitó un apoyo de la sociedad argentina de un 82 por ciento.

Durante la Guerra de Las Malvinas (1982), no fue una casualidad entonces que Chile se mostrara abierto partidario del Reino Unido y ajeno a la solidaridad regional (incluso en contra de la tradicional política de descolonización y de apoyo a Argentina en su reclamo), negándose (junto a Estados Unidos, Colombia y Trinidad y Tobago) a activar el Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR)[120] y prestándole apoyo logístico y de inteligencia a este país europeo en el convencimiento de que después de esta aventura bélica vendría una ofensiva militar argentina a los territorios en disputa.[121]

Los intentos de asesinato o asesinatos en el marco de la "*Operación Cóndor*" (atentado a Bernardo Leighton y esposa en Italia, los asesinatos de Prats y su esposa en

[119] La dictadura brasileña (1964-1985) fue uno de los mayores sostenes del régimen cívico-militar chileno del general Pinochet (1973-1990), al que le dio un generoso, aunque interesado apoyo financiero y diplomático. Documentos inéditos (266 cables) de la Cancillería (Itamaraty) revelados por el diario *Folha de São Paulo*, el 13 de Diciembre de 2011, también pusieron en evidencia los acuerdos de ambas dictaduras para reprimir a la oposición política de los respectivos países, en lo que constituyó un capítulo previo, y desconocido hasta entonces, del Plan Cóndor de coordinación represiva continental.

[120] Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), también llamado Tratado de Río, es un pacto de defensa mutua interamericano (desde Alaska hasta la Antártica) firmado el 2 de septiembre de 1947 en Río de Janeiro. Según el artículo 3.1 en caso de (...) un ataque armado por cualquier Estado contra un Estado Americano, será considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos, y en consecuencia, cada una de las Partes Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

[121] Ver, entre otros, entrevista de Carlos Monge a Hugh Bicheno, agente del MI6 británico y autor del libro *Al filo de la navaja: La historia no oficial de la guerra de Malvinas*, en *La Segunda*, 19 de mayo de 2012, pp. 26 y 31.

Argentina y el fracasado intento de Carlos Altamirano) y la continuidad de la represión interna, solo empeoraron la situación para el régimen militar. Desde la segunda mitad de los años ochenta, con la llegada del demócrata James Carter y su política de DD.HH. hubo presiones de Estados Unidos en favor de un retorno a la democracia al cambiar Washington su política de apoyo a las dictaduras. El apoyo o no apoyo de Estados Unidos fue esencial para la continuidad de regímenes considerados parias como el chileno. En el caso de Sudáfrica, por ejemplo, el retiro del apoyo de Washington en 1987 por la condenas a la represión interna, apoyo que sostenía desde 1975 por considerarla el bastión anticomunista del continente, y que coincide con una serie de otros procesos (derrota de Sudáfrica en Angola, fin de la Guerra Fría, etc.) conducen a la toma de la dirección del país por parte de Frederik de Klerk en 1989, quien declara públicamente sus intenciones de pactar con la oposición y democratizar Sudáfrica.[122]

El aislamiento y condena política que padeció el régimen de Pinochet hasta el final de sus días, tuvo como contra partida una solidaridad activa con la oposición democrática chilena: actos de apoyo a la democratización, visitas internacionales, financiamiento de proyectos de medios de prensa y a organizaciones políticas y sindicales, etc.

Bajo la influencia de la revolución capitalista liberal llevada a cabo por los economistas de Chicago, el régimen de Pinochet introdujo profundas reformas tanto económicas como políticas y sociales que eran concurrentes con los principios y valores neoliberales de sus mentores.[123] Esta realidad, unido a los efectos concretos del desmantelamiento del Estado de compromiso, la violación de los DD.HH., políticos y sociales, y el aislamiento internacional, imponen un pesado lastre a la transición con el cual debe lidiar la Concertación tanto por las demandas insatisfechas como por lo que plantea Siavellis (2004: 196) en cuanto a que:

> "(…) virtualmente todos los regímenes autoritarios aspiran a modificar las opiniones y valores de la población a través de variadas reformas sociales, educacionales, políticas y económicas, de modo de minimizar la base de apoyo de aquellos sectores que el régimen percibe como sus enemigos".

[122] Frederik de Klerk inició el camino de reformas democrática que terminan con el apartheid y con la liberación de Mandela en 1990, la formulación de una nueva Constitución y las primeras elecciones libres en 1994. Este camino le valió el Premio Príncipe de Asturias en 1992 y el Nobel en 1993 compartido con Nelson Mandela.

[123] Ver Manuel Gárate Chateau, (2012), *La revolución capitalista de Chile (1973-2003)*. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

En este período, en todo caso, empiezan a mostrarse claros signos de desgaste (limitaciones del modelo y fisuras internas en el poder gubernamental) que se amalgamaron con una interpelación sostenidas desde un ámbito internacional diverso y el inicio de contraargumentaciones políticas internas que se empiezan a levantar desde la oposición nacional. Se empieza a configurar un escenario conflictuado.